

Santiago, once de octubre de dos mil veinticuatro.

VISTOS:

Los días veinticuatro, veintiséis, veintisiete y treinta de septiembre, y uno de octubre, todos del presente año, ante esta sala del Cuarto Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago, conformada por los jueces titulares Cristina Cabello Muñoz, quien la presidió, Claudia Morgado Moscoso, como tercera integrante, y Cristian Fuentealba Zamora, como redactor, se llevó a efecto la audiencia de juicio oral en la causa **RUC N° 2200154691-4, RIT N° 301-2023**, seguida respecto de los acusados **ARMANDO JOSÉ GONZÁLEZ LEÓN**, de nacionalidad venezolana, cédula de identidad -según canje penal- N° 14.880.872-4, nacido en Caracas el día 10 de julio de 1998, labores, soltero, domiciliado en calle San Pablo con Matucana, comuna de Santiago; y **RICKY ALONSO BARAZARTE MADERA**, de nacionalidad venezolana, nacido en Caracas el día 18 de junio de 2002, cédula de identidad -según canje penal- N° 14.890.675-0, comerciante ambulante, soltero, domiciliado en calle San Pablo con Matucana, comuna de Santiago.

Sostuvo la acusación el fiscal adjunto Arturo Gómez Mieres; por su parte, la representación de ambos encartados estuvo a cargo de la defensora penal pública Natalia Bravo Collado.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Imputación. Que la acusación fiscal estuvo fundada en los siguientes hechos:

“Hecho N°1: *El día 15 de febrero de 2022 a las 04.30 horas aproximadamente en calle Moneda con Manuel Rodríguez en la comuna de Santiago, los imputados RICKY ALFONSO BARAZARTE MADERA y ARMANDO JOSÉ GONZÁLEZ LEÓN, previamente concertados, procedieron a intimidar con armas corto punzantes y golpear a la víctima Darío Arévalo Galíndez que transitaba por el lugar, con el objeto de sustraer sus pertenencias, y al oponer resistencia la víctima, los imputados con las armas corto punzantes que portaban lo apuñalan en reiteradas ocasiones y en distintas partes del cuerpo causándole la muerte producto de un hemo tórax lesión corto punzante toraco pulmonar para luego ambos huir del lugar.*

Hecho N°2: *El día 16 de febrero de 2022 a las 01.20 horas aproximadamente en calle Catedral con Almirante Barroso en la comuna de Santiago, los imputados RICKY*

ALFONSO BARAZARTE MADERA y JHONNY YONIER DUDAMEL DUDAMEL previamente concertados, procedieron a intimidar con armas corto punzantes a las víctimas David Fuenzalida Campos y Javiera Guzmán Marín, que se encontraban en el lugar, con el objeto de sustraer las especies que portaban, agrediendo el imputado BARAZARTE MADERA a la víctima Javiera Guzmán Marín logrando sustraer el bolso que portaba y el imputado DUDAMEL DUDAMEL, agrediendo a la víctima David Fuenzalida Campos propinándole dos puñaladas con un chuchillo en su brazo y tórax sustrayéndole un bolso con documentación personal y la suma de \$150.000.-, para luego ambos huir del lugar. Producto de dicha agresión la víctima Fuenzalida Campos resultó con lesiones consistentes en Herida pared posterior del tórax de carácter grave”.

A juicio del Ministerio Público, los sucesos antes descritos son constitutivos, respectivamente, de los delitos consumados de robo con homicidio, tipificado en el artículo 433 N°1 del Código Penal, y robo calificado con lesiones graves, previsto, este último, en el artículo 433 N° 3 del citado texto legal. A ambos acusados atribuyó, en lo pertinente, una intervención calidad de autores.

En lo relativo a circunstancias modificatorias de responsabilidad penal, la Fiscalía únicamente invocó la agravante prevista en el artículo 449 bis del Código Punitivo, esto es, la de haber actuado formando parte de una agrupación u organización de dos o más personas.

Finalmente, en lo tocante a su pretensión punitiva, el Ministerio Público petitionó, según se lee textualmente en el auto de apertura de juicio oral, lo siguiente:

“Al acusado RICKY ALONSO BARAZARTE MADERA las penas de PRESIDIO PERPETUO SIMPLE, conjuntamente con las accesorias legales y las cosas de la causa; como autor del delito de ROBO CON HOMICIDIO, descrito y sancionado en el artículo 433 N°1 del Código Penal, y VEINTE AÑOS DE PRESIDIO MAYOR EN SU GRADO MÁXIMO, conjuntamente con las accesorias legales y las cosas de la causa; como autor del delito de ROBO CALIFICADO CON LESIONES GRAVES, descrito y sancionado en el artículo 433 N°3 del Código Penal.

Al acusado ARMANDO JOSÉ GONZÁLEZ LEÓN, la pena de PRESIDIO PERPETUO SIMPLE, conjuntamente con las accesorias legales y las cosas de la causa;

como autor del delito de ROBO CON HOMICIDIO, descrito y sancionado en el artículo 433 N°1 del Código Penal”.

SEGUNDO: Alegatos de apertura y clausura del Ministerio Público. Que en su **discurso de inicio**, la Fiscalía, en síntesis, reiteró el contenido de su imputación en estrados, solicitando la dictación de un veredicto condenatorio respecto de los dos delitos materia de la imputación y con relación, en lo pertinente, a ambos acusados. Indicó, en cuanto al hecho 1, que la víctima, de nacionalidad venezolana, transitaba por Moneda, de poniente a oriente, y que al llegar a Manuel Rodríguez venían caminando, en sentido contrario, ambos imputados, quienes la abordaron y la apuñalaron en distintas partes del cuerpo, todo lo cual será refrendado por el médico criminalístico y la doctora Bustos. Adicionó, que también se incorporaría prueba visual, obtenida del trabajo efectuado por la Brigada de Homicidios, en la que se visualiza el recorrido de los imputados, determinándose que éstos arrendaban en una toma, siendo del todo importante la circunstancia de que cuando salieron de la misma Ricky Barazarte vestía un pantalón blanco, pero que, sin embargo, cerca de Mapocho, éste se colocó un pantalón oscuro sobre dicha prenda.

Continuando con su discurso de inicio señaló que también se introduciría prueba científica, la que permitiría establecer que dentro de las vestimentas encontradas en la habitación del acusado González, diligencia realizada en virtud de una autorización judicial de entrada y registro, se hallaron manchas pardo rojizas correspondientes a la sangre del occiso. Precisó que, además, hay una testigo peruana que residía al frente de los acusados, la cual dio cuenta de que González León vivía en esa toma. Agregó, que la Policía efectuó un control de identidad a los dos acusados y al coimputado Dudamel, reconociendo los dos primeros, al prestar declaración, haber querido sustraer especies al afectado, culpándose mutuamente, eso sí, sobre quién apuñaló a la víctima. Indicó, asimismo, en cuanto al hecho 2, que el día 16 de febrero, mientras el acusado Barazarte y el coimputado Dudamel caminaban por Catedral, se encontraron con una pareja de jóvenes, quienes pintaban unos grafitis, acercándosele Barazarte a la mujer, sustrayéndole especies, en tanto que Dudamel intimidó con un arma a la víctima de sexo masculino, sin perjuicio de lo cual, además, la lesionó y le sustrajo su bolso, configurándose con ello un robo calificado.

En su **alegato de clausura**, señaló, en resumen, que lograron acreditarse los dos hechos materia de la imputación, así como también, respectivamente, la autoría de los acusados. Indicó al efecto que en el robo con homicidio, ambos imputados, para asegurar su impunidad, mataron a la víctima, lo cual se deduce de la propia declaración que éstos prestaron durante la investigación, en que reconocieron que su objetivo era robarle al afectado, no afectando la validez de la misma el mero hecho de que no encontrarse presente algún abogado defensor, toda vez que el Código Procesal Penal expresamente lo permite. Puntualizó, que en los videos corresponde hacer un orden respecto a la forma en que vestían los acusados, pues cuando éstos salen, pasadas las 3:00 de la mañana, Barazarte llevaba un pantalón blanco, manteniéndose todo lo demás igual, esto es, la parka negra y el gorro de lana con pompón; González, por su parte, siempre mantuvo un pantalón oscuro, un polerón de distintos colores y un jockey.

Continuando con su alegato de cierre, indicó que una vez que los imputados -en el hecho N° 1- salieron de calle Maturana tomaron San Pablo, dirigiéndose luego al sector de Independencia; en calle Artesanos, según puede verse en los videos, Barazarte ya llevaba un pantalón oscuro. Añadió, que mientras éstos circulaban por Manuel Rodríguez, y una vez que llegan a Moneda, se encontraron con la víctima, siendo esta última agredida por los dos primeros, tal como lo dijo el testigo señor Giraldo. Precisó, que la huida de los imputados se produjo por Moneda hacia el poniente, hasta llegar nuevamente a Maturana nuevamente, llevando las vestimentas que se aprecian en el video. Indicó, asimismo, que la prueba científica impide controvertir que había sangre de la víctima en el polerón de González y en la parka que vestía Barazarte.

Siempre en el contexto de su intervención final, señaló que al día siguiente cambiaron los actores, manteniéndose eso sí el imputado Barazarte, quien esta vez, junto a un coimputado ya condenado, abordó a una pareja, conformada por las víctimas David Fuenzalida y Javiera; si bien estos últimos no concurrieron a deponer, sus testimonios igualmente fueron introducidos a través de los funcionarios que les tomaron declaración. Indicó, además, que las imágenes de los registros de cámaras permitían visualizar los instantes en que Barazarte y el coimputado arrancaron y fueron seguidos, llevando el primero nuevamente el mismo gorro. Agregó, que al ejecutarse la autorización de entrada y registro se encontró el bolso de David Fuenzalida, como asimismo, en las habitaciones,

habían cuchillos por todos lados; en uno de estos últimos incluso se halló sangre que no correspondía a la víctima Fuenzalida ni al occiso. Precisó, que los acusados hacían de su profesión salir por las noches a abordar víctimas vulnerables, y que en el caso del afectado Fuenzalida, quien fue apuñalado por el condenado Dudamel, pudo salvarse pese a la gravedad de sus lesiones, pudiendo incluso haber fallecido en caso de no haber recibido los cuidados médicos oportunos.

Replicando, indicó que en cuanto al exceso de dolo que la defensa atribuye al condenado Dudamel- en el hecho N° 2-, no podía perderse de vista que Barazarte salió con este último a sustraer especies, con cuchillos, actuando, además, de forma concertada, de tal manera que cualquiera de los dos podría haber usado un arma blanca, existiendo, en consecuencia, dolo respecto del delito de robo agravado.

TERCERO: Alegatos de apertura y clausura de la defensa. Que la defensa de **ambos encartados** indicó, en su **alegato de inicio**, en síntesis, que en lo referente al primer hecho no se estaba en presencia de un robo con homicidio, sino que únicamente de un homicidio simple, pues lo que señala la acusación, y que se relaciona con el robo, no sería acreditado con la prueba de cargo. Agregó, en cuanto al hecho 2, que éste sólo involucra a Ricky Barazarte, existiendo allí un actuar diferenciado, en términos tales que su representado sólo participó de un robo con intimidación, verificándose un exceso de dolo de parte del coimputado ya condenado. Finalizando su intervención, señaló que no concurría la agravante contemplada en el artículo 449 bis del Código Penal, pues incluso en caso de estimarse que se configuran los dos delitos por los que se acusó, únicamente se verificaría una hipótesis de coautoría, no una agrupación u organización, máxime si los acusados no intervienen en ambos sucesos.

En su discurso de clausura, indicó, en síntesis, que en cuanto al hecho 1, y tal como lo alegó en la apertura, existía prueba suficiente para establecer que ambos acusados hirieron a la víctima, perdiendo esta última la vida. Agregó, que si bien la declaración de los imputados, durante la investigación, puede ser prestada sin la presencia de un abogado defensor, el hecho de que éstos no hayan depuesto en el juicio también debe tomarse en consideración, toda vez que si se hace abstracción de dicha declaración no existía ningún elemento que diese cuenta del ánimo apropiatorio. Puntualizó, que en caso de condenarse por robo con homicidio se vulneraría lo dispuesto en el artículo 340 del Código Procesal

Penal, el cual señala que no se puede condenar a una persona con el solo mérito de su declaración, máxime si la dinámica del mismo fue fugaz, esto es, abordar, herir y huir.

Continuando con su intervención final indicó que el otro antecedente que se ha esgrimido, en cuanto a un eventual ánimo apropiatorio -en el hecho N° 1-, está dado por el supuesto robo posterior, el cual fue expuesto por los funcionarios Henríquez y Guzmán, quienes afirmaron que había un video que mostraba tal suceso. Señaló que, sin embargo, dicha información está sesgada, toda vez que, por el contrario, no se veía ninguna interacción, forcejeo u apropiación, de tal manera que no existía ningún antecedente que, entrelazado con la declaración de sus representados, permitiese concluir que hubo ánimo apropiatorio, más allá de un homicidio simple.

Siempre en el contexto de su alegato de cierre, señaló que en cuanto al hecho 2, la postura principal de la defensa era que el mismo no fue acreditado, toda vez que sólo hubo testimonios de oídas respecto de los relatos de las víctimas, ya que estas últimas no comparecieron, a lo cual se suma que las grabaciones de las cámaras no permitían tener por acreditado dicho suceso. Puntualizó que en subsidio de lo anterior, y en atención a que de acuerdo al funcionario que tomó declaración a David Fuenzalida, si bien los dos sujetos abordaron a la pareja, Ricky únicamente intimidó a la víctima mujer con un arma cortante, haciéndose de su bolso, pero sin resultar esta última lesionada, mientras que, por su parte, el coimputado Jhonny Dudamel, luego atravesar la calle con el ofendido Fuenzalida, lo agredió con un arma cortante por la espalda. Adicionó, que en el relato de la acusación se encuentra descrita tal actuación diferenciada, siendo el caso, además, que el actuar de Jhonny Dudamel no resulta comunicable a su representado, sobre todo si existía una distancia espacial desde el lugar donde ocurre el robo con intimidación y donde se acometió a la víctima masculina, por lo que en caso de condena su defendido sólo debería ser castigado por un delito de robo con intimidación.

Haciéndose cargo de la réplica de la Fiscalía, indicó, de manera extractada, que el cuchillo es un elemento comúnmente empleado para cometer delitos de robo con intimidación, sin embargo, su utilización no necesariamente permite tener por establecido el concierto respecto de cualquier consecuencia posterior, razón por la cual, a su juicio, resultaba procedente la recalificación del hecho N° 2.

CUARTO: Convenciones probatorias. Que según se consigna en el fundamento séptimo del auto de apertura de juicio oral, los intervinientes no acordaron convenciones probatorias.

QUINTO: Ejercicio facultad de no autoincriminación. Que en la oportunidad prevista en el artículo 326 del Código Procesal Penal ambos acusados hicieron expresa reserva a su derecho a guardar silencio.

SEXTO: Prueba rendida por la Fiscalía. Que el órgano persecutor rindió, durante la audiencia de juicio oral, las siguientes probanzas:

TESTIMONIAL:

1.- Rodrigo Octavio Henríquez Iturra, chileno, nacido el 18 de marzo de 1993, soltero, Inspector de la Policía de Investigaciones de Chile.

2.- Alexei Kormshchikov, ruso, nacido el 19 de abril de 1977, casado, ingeniero eléctrico.

3.- Julia Fiorela Gómez Ninanya, peruana, nacida el 24 de abril de 1987, conviviente, trabajadora de casa.

4.- Ignacio Benjamín Morales Matta, chileno, nacido el 20 de julio de 1972, soltero, Inspector de la Policía de Investigaciones de Chile.

5.- Roberto Andrés Poo Astudillo, chileno, nacido el 7 de noviembre de 1985, soltero, Subcomisario de la Policía de Investigaciones de Chile.

6.- Patricio Antonio Barrios Toledo, chileno, nacido el 9 de octubre de 1987, conviviente civil, Inspector de la Policía de Investigaciones de Chile.

7.- Rocío Natalia González Valenzuela, chilena, nacida el 28 de agosto de 1990, soltera, Subcomisaria de la Policía de Investigaciones de Chile.

8.- Nicolás Andrés López Leal, chileno, nacido el 6 de junio de 1996, soltero, Inspector de la Policía de Investigaciones de Chile.

9.- Enrique Alejandro Paredes Sandoval, chileno, nacido el 2 de diciembre de 1986, casado, Sargento 2° de Carabineros.

10.- Luis Alejandro Espinoza González, chileno, nacido el 30 de diciembre de 1981, soltero, Comisario de la Policía de Investigaciones de Chile.

11.- Joseline del Pilar Becerra Becerra, chilena, nacida el 14 de mayo de 1992, soltera, Inspectora de la Policía de Investigaciones de Chile.

12.- Vanessa Alejandra Arias Padilla, chilena, nacida el 31 de marzo de 1992, soltera, Inspectora de la Policía de Investigaciones de Chile

13.- David Cristian Villagrán Villagrán, chileno, nacido el 20 de abril de 1987, soltero, Comisario de la Policía de Investigaciones de Chile.

14.- Sebastián Guzmán Díaz, chileno, nacido el 2 de junio de 1992, soltero, Inspector de la Policía de Investigaciones de Chile.

15.- Sagery Gómez Taylor, chilena, nacida el 8 de agosto de 1990, soltera, Subcomisaria de la Policía de Investigaciones de Chile.

PERICIAL:

1.- Vivian Cecilia Bustos Baquerizo, chilena, nacida el 18 de enero de 1956, médico tanatólogo del Servicio Médico Legal de Santiago.

2.- Patricia Negretti Castro, chilena, nacida el 24 de noviembre de 1961, médico cirujano, casada.

3.- Cristian Andrés Santander Sepúlveda, chileno, nacido el 22 de agosto de 1975, bioquímico.

4.- Germán Eduardo Tapia Coppa, chileno, nacido el 25 de octubre de 1973, soltero, médico cirujano, especialista en medicina legal.

5.- Claudia Andrea Mera Muñoz, chilena, nacida el 2 de enero de 1978, divorciada, perito dibujante y planimetrista.

6.- Mónica Soledad Novoa González, chilena, nacida el 11 de octubre de 1974, casada, perito fotógrafa de la Policía de Investigaciones de Chile.

7.- Informe de alcoholemia N° 13-SCL-OH-03277-22, de 3 de marzo del 2022, emitido por el Servicio Médico Legal y suscrito por la perito ejecutora Nancy Fuentes Barriga y por la perito revisora María Elena Soto Ramos, relativo a la víctima Darío Arévalo Galíndez, incorporado de conformidad con lo dispuesto en el artículo 315 inciso segundo del Código Procesal Penal, esto es, mediante la sola presentación del documento.

PRUEBA MATERIAL:

1.- Un DVD contenedor de grabaciones del Edificio Plaza Moneda, levantado bajo cadena de custodia NUE 6198149.

2.- Un DVD contenedor de grabaciones del Instituto INACAP, levantado bajo cadena de custodia NUE 6198150.

3.- Un DVD contenedor de grabaciones del conjunto habitacional ubicado en Agustinas N° 1878, levantado bajo cadena de custodia NUE 6198151.

4.- Un DVD contenedor de grabaciones levantadas de calle Maturana N° 793, cadena de custodia NUE 6198120.

5.- Un DVD contenedor de grabaciones ubicadas en calle La Paz N° 123, levantado bajo cadena de custodia NUE 6198143.

6.- Un DVD contenedor de grabaciones ubicadas en calle Maturana N° 793, levantado bajo cadena de custodia NUE 6198144.

7.- Un DVD contenedor de grabaciones ubicadas en calle Catedral N° 1793, levantado bajo cadena de custodia NUE 6198164.

8.- Un gorro blanco de lana y un (01) par de zapatillas rojas con negro marca Nike, incautados al imputado Jhonny Yonier Dudamel Dudamel desde su domicilio y levantados bajo cadena de custodia NUE 6372965.

9.- Una parka negra, una parka azul y un polerón con franjas negra, gris y blanca, incautados al imputado Armando José González León desde su domicilio y levantado bajo cadena de custodia NUE 4673110.

10.- Un bolso negro sin marca con tres compartimentos, incautado al imputado Ricky Alfonso Barazarte Madera desde su domicilio y levantado bajo cadena de custodia NUE 6198132.

11.- Un short de mezclilla azul marca Brooklyn, una chaqueta negra sin marca visible, un par de zapatillas marca Jordan y un pantalón blanco marca Seventbird, incautados al imputado Ricky Alfonso Barazarte Madera desde su domicilio y levantados bajo cadena de custodia NUE 6372964.

12.- Un DVD contenedor de grabaciones ubicadas en calle Morandé N° 917, levantado bajo cadena de custodia NUE 6198142.

13.- Un DVD contenedor de grabaciones del colegio Marista, levantado bajo cadena de custodia NUE 6198156.

14.- Un DVD contenedor de grabaciones del edificio La Reconquista, levantado bajo cadena de custodia NUE 6198154.

15.- Un DVD contenedor de grabaciones ubicadas en calle Manuel Rodríguez Norte N° 558, levantado bajo cadena de custodia NUE 6198140.

16.- Un DVD contenedor de grabaciones ubicadas en calle Ricardo Cumming N° 690, levantado bajo cadena de custodia NUE 6198134.

17.- Un DVD contenedor de grabaciones del restaurant Las Vacas Locas, levantado bajo cadena de custodia NUE 6198153.

18.- Un DVD contenedor de grabaciones del Edificio Plaza Centro, levantado bajo cadena de custodia NUE 6198157.

19.- Un DVD contenedor de grabaciones ubicadas en calle Rosas N° 2393, levantado bajo cadena de custodia NUE 6198118.

20.- Un DVD contenedor de grabaciones del Edificio ubicado en calle Catedral N° 2351, levantado bajo cadena de custodia NUE 6198158.

21.- Un DVD contenedor de grabaciones ubicadas en calle San Pablo N° 1539, levantado bajo cadena de custodia NUE 6198147.

22.- Un DVD contenedor de grabaciones ubicadas en la Unidad Interpol Santiago, levantado bajo cadena de custodia NUE 6198148.

OTROS MEDIOS DE PRUEBA:

1.- Set fotográfico respecto del cual se incorporaron cinco (5) imágenes, anexas al Informe Policial N° 592, de la Brigada de Homicidios Metropolitana.

2.- Set fotográfico respecto del cual se incorpora un total de treinta (30) imágenes correspondientes al análisis de las grabaciones ubicadas en calle Catedral N° 1793, confeccionado por el funcionario de la PDI Daniela González Fuentes.

3.- Set fotográfico respecto del cual se incorporan treinta y tres (33) fotografías correspondientes a la habitación N°1 del inmueble ubicado en calle Maturana N° 781, comuna de Santiago, confeccionado por la funcionaria de la PDI Daniela González Fuentes.

4.- Set compuesto de treinta y cuatro (34) fotografías correspondientes a la habitación N°2 del inmueble ubicado en calle Maturana N° 781, comuna de Santiago, confeccionado por la funcionaria de la PDI Joseline Becerra Becerra.

5.- Set fotográfico respecto del cual se introdujeron dieciséis (16) imágenes correspondientes a la habitación N°3 del inmueble ubicado en calle Maturana N° 781, comuna de Santiago, confeccionado por el funcionario de la PDI Nicolás López Leal.

6.- Set compuesto de veintiséis (26) fotografías anexas al informe de autopsia N° RM-13AUT-480-22, de fecha 8 de marzo del 2022.

7.- Set de imágenes respecto del cual se introdujeron veintinueve (29) fotografías anexas al informe científico técnico del sitio del suceso del día 14 al 15 de febrero del 2022.

8.- Un croquis de plano, anexo al informe pericial de dibujo y planimetría N° 619/2022.

9.- Set compuesto de ciento cinco (105) imágenes anexas al informe pericial fotográfico N° 414-022.

DOCUMENTAL:

1.- Dato de Atención de Urgencia N° E0005150011, del Hospital San Juan de Dios, de fecha 16 de febrero del 2022, relativo a David Leandro Fuenzalida Campos.

2.- Oficio N° 749/2022, de fecha 25 de agosto de 2022, emitido por el Hospital San Juan de Dios, en que se acompaña ficha clínica de David Fuenzalida Campos.

3.- Ficha Clínica N° 2954829, de David Fuenzalida Campos, emitida por el Hospital San Juan de Dios.

SÉPTIMO: Prueba de la defensa. Que la defensa de ambos encartados se sirvió de las mismas probanzas incorporadas por el Ministerio Público, sin introducir elementos de convicción adicionales.

OCTAVO: Hechos acreditados. Que con el mérito de las probanzas incorporadas durante el juicio oral, las cuales fueron libremente apreciadas por el Tribunal, procurando no contradecir los principios de la lógica, las máximas de experiencia y los conocimientos científicamente afianzados, se tienen por asentados, más allá de toda duda razonable, los siguientes sucesos:

Hecho N°1:

El día 15 de febrero de 2022, aproximadamente a las 4:30 horas, en calle Moneda con Manuel Rodríguez, comuna de Santiago, Ricky Alfonso Barazarte Madera y Armando José González León, quienes portaban armas cortopunzantes, apuñalaron en distintas partes de su cuerpo a Darío Arévalo Galíndez, causándole la muerte producto de un hemotórax.

Hecho N°2:

El día 16 de febrero de 2022, aproximadamente a las 1:20 horas, en calle Catedral con Almirante Barroso, comuna de Santiago, Ricky Alfonso Barazarte Madera y un coimputado que no formó parte del presente juicio, ambos previamente concertados, intimidaron con armas cortopunzantes a David Fuenzalida Campos y a Javiera Guzmán

Marín, con el objeto de sustraerles especies, procediendo Barazarte Madera, en ese contexto, a apropiarse del bolso que portaba la últimas de las mencionadas, en tanto que, por su parte, el coimputado ya aludido propinó dos puñaladas, en su brazo y tórax, a David Fuenzalida Campos, sustrayéndole un bolso y la suma de ciento cincuenta mil pesos (\$150.000). Producto de la antedicha agresión, la víctima Fuenzalida Campos resultó con lesiones consistentes en herida de la pared posterior del tórax, de carácter grave.

NOVENO: Valoración de la prueba con relación al hecho N° 1. Que atendido el elevado estándar de certeza que debe alcanzar el órgano jurisdiccional para fundar una sentencia condenatoria en nuestro ordenamiento jurídico, tal cual fluye del artículo 340 del Código Procesal Penal, se hace necesario que el órgano persecutor rinda pruebas de alta calidad.

Sobre la base de dicha premisa, estos jueces estiman que la prueba de cargo permitió, en lo referente a la práctica totalidad de los extremos fácticos de la acusación, alcanzar el nivel de certidumbre a que se ha hecho referencia. De entrada, cabe indicar que no resultó controvertido el hecho de que el afectado, en las circunstancias de tiempo y lugar descritas en la imputación fiscal, fue herido con elementos cortopunzantes por ambos encausados, a consecuencia de lo cual falleció producto de un hemotórax.

En tal sentido, la discusión se circunscribió a la cuestión sobre si tal ataque mortal estuvo motivado, o no, por un afán apropiatorio de especies de parte de los encartados, aspecto respecto del cual, tal como se analizará, la prueba de cargo no aportó información que permitiese al Tribunal alcanzar convicción sobre dicha finalidad. Con todo, cabe señalar que si bien fueron incorporados testigos de cargo que dieron cuenta de la declaración prestada por los acusados, durante la fase investigativa, sin la presencia de defensor, en las cuales éstos afirmaron haber acometido a la víctima con el objeto de robarle, tales asertos resultaron, en opinión de la sala, inidóneos para la acreditación del aludido extremo. Lo anterior, pues sin perjuicio de que tales encartados hicieron expresa reserva de su derecho a guardar silencio en el juicio oral, la mentada información constituyó la única que los relacionó con un propósito de esa naturaleza, de modo que cualquier intento de tenerlo por demostrado sobre la base de esas declaraciones infringiría lo preceptuado en el inciso final del artículo 340 del Código Procesal Penal, que impide expresamente condenar a una persona con el solo mérito de su declaración.

A continuación, se analizarán con mayor detenimiento los diversos elementos de convicción rendidos con respecto al hecho N° 1 de la imputación fiscal.

1.- En cuanto a la dinámica en que se produjo la agresión mortal en contra de la víctima:

(i) Un primer aspecto a considerar concierne al hallazgo, en horas de la madrugada del 15 de febrero de 2022, en la vía pública, específicamente en un paso sobre nivel existente en calle Moneda, intersección con Avenida Manuel Rodríguez, comuna de Santiago, del cuerpo sin vida de la víctima Darío Arévalo Galíndez, y a las primeras diligencias efectuadas con ocasión de dicho hecho, orientadas a establecer su dinámica y la causa de muerte del occiso.

En tal sentido, en primer término, el Sargento 2° Enrique Paredes Sandoval, relató que en horas de la madrugada del 15 de febrero de 2022, mientras se encontraba de servicio de tercer turno de población, junto al Cabo Marchant, recibieron un comunicado respecto al hallazgo de un lesionado en calle Moneda esquina Manuel Rodríguez. Agregó, que al llegar al lugar se encontraba la víctima fallecida, lo cual ya había sido constatado por personal del SAMU, de modo que aislaron el sitio del suceso y tomaron contacto con el fiscal de turno, quien instruyó que personal especializado de la PDI se hiciera cargo de las primeras diligencias.

En segundo lugar, la Inspectora Vanessa Arias Padilla dio cuenta de la confección del informe científico técnico del sitio del suceso, luego de constituirse, a requerimiento del Ministerio Público, en el lugar en que se encontró el cadáver del ofendido, correspondiente a la intersección de calles antes mencionada, como asimismo, de las primeras diligencias realizadas con relación al hecho investigado. En efecto, atestiguó, en resumen, que su labor consistió en la confección del informe científico técnico del sitio del suceso, recaído en los hechos ocurridos el 15 de febrero de 2022, a solicitud de la Fiscalía Centro Norte, toda vez que en la mañana de ese día había una persona fallecida en la intersección de Avenida Manuel Rodríguez con Moneda, comuna de Santiago. Agregó, que concurrió al lugar junto a personal de Lacrim y del Departamento de Medicina Criminalística de la Policía de Investigaciones. Puntualizó, que el fallecido se encontraba, específicamente, en calle Moneda, en un paso sobre nivel de la autopista central, acera norte. Adicionó, que al practicarse el examen externo se observaron múltiples heridas cortopunzantes por parte

anterior y posterior, lo que fue considerado por el doctor del Departamento de Medicina Criminalística como la causa de muerte. Indicó, además, que también se fijó evidencia bioquímica existente en el lugar.

En tercer término, y en lo concerniente a la determinación de la identidad del fallecido, se contó con el testimonio de Alexei Kormshchikov. Sobre el particular, dicho deponente manifestó, en síntesis, que conocía a la víctima Darío, de nacionalidad venezolana, pues le alquiló a él una pieza y vivió en su casa durante aproximadamente seis meses. Añadió, que era una persona reservada, cerrada, que no tenía amigos ni familia -en Chile-, y que llegó a este país para tener un mejor rubro, el cual; éste trabajaba todos los días, en construcción y, al parecer, todo lo que ganaba lo reservaba para su familia. Puntualizó, que hacía aproximadamente dos años, Darío salió a trabajar y no regresó más; ese mismo día llegaron a su domicilio oficiales de la “PDI”, los cuales le mostraron una imagen de una cámara, señalándole que había fallecido, confirmándole que era efectivamente era él. Adicionó, que dichos oficiales querían ver la pieza de Darío, para identificarlo, encontrando allí su pasaporte.

En cuarto término, y en lo referente al examen externo del cadáver del ofendido, efectuado en el mismo lugar en que fue hallado su cuerpo, se incorporó la declaración pericial de Germán Tapia Coppa, médico del Departamento de Criminalística de la Policía de Investigaciones de Chile, quien aseveró que de acuerdo a dicho examen la causa de muerte presunta obedecía a múltiples traumatismos torácicos por objeto cortopunzante.

Conforme a los asertos de este último, en resumen, el día 15 de febrero de 2022 acompañó a oficiales de la Brigada de Homicidios Metropolitana para realizar el examen externo de un fallecido, quien mantenía antecedentes de haber sufrido un homicidio con arma cortopunzante en la vía pública, en la comuna de Santiago. Agregó, que llegaron al lugar a eso de las 8:30 horas, siendo su identidad presunta la de Darío Arévalo Galíndez, de treinta y cuatro años, quien presentaba lesiones de naturaleza cortopunzante y otras de carácter contusa. Puntualizó, que a nivel de la cabeza, en la región interciliar, mantenía una herida cortante superficial; por plano anterior, a nivel del tronco del tórax, en el tercio medio del hemitórax izquierdo, una herida cortopunzante; a nivel del abdomen, en el hipocondrio derecho, en el sector superior derecho de la pared abdominal, otra herida de naturaleza cortopunzante. Adicionó, que en la extremidad inferior derecha, por cara externa

de la rodilla, se apreciaba un área donde habían múltiples lesiones irregulares, al igual que en la cara externa del tercio superior de la pierna del mismo lado; por plano posterior, habían múltiples lesiones de naturaleza cortopunzante en el tórax, específicamente en el hemitórax posterior derecho; en el tercio medio, por su parte, había una lesión de naturaleza punzante que estaba asociada a una escoriación, correspondiente a una lesión de naturaleza contusa. Precisó, que en el hemitórax posterior izquierdo, a nivel del tercio medio, se observaban tres heridas cortopunzantes, y a nivel del tercio inferior del mismo hemitórax posterior izquierdo, una lesión cortopunzante; agregado a esto, en la extremidad superior izquierda, en la unión del tercio superior con el tercio medio del brazo izquierdo, había otra lesión de naturaleza cortopunzante. Aseveró, en cuanto a sus conclusiones, que en virtud de los fenómenos cadavéricos podía establecerse una data de muerte aproximada de tres a cuatro horas, como asimismo, que por las lesiones presentes en el cuerpo la causa presunta de muerte correspondía a la de múltiples traumatismos torácicos por objeto corto punzante.

Es menester indicar, además, que la declaración pericial antes mencionada fue debidamente ilustrada mediante el set de imágenes, respecto de las cuales fueron incorporadas veintinueve fotografías, y que se encuentran anexas al informe científico técnico del sitio del suceso del día 14 al 15 de febrero de 2022, exhibidas a dicho experto, en las que precisamente se aprecia el cadáver del occiso en la vía pública, así como también, las distintas lesiones que éste presentaba.

En quinto lugar, y a objeto de determinar, de manera más precisa, la dinámica de la agresión, se incorporó información relativa a un testigo presencial, a la sazón conserje de un edificio ubicado en la intersección de calle Moneda y Manuel Rodríguez, comuna de Santiago, el cual si bien no depuso en estrados sus dichos igualmente fueron introducidos a través del testimonio de un efectivo policial que tomó conocimiento de su relato, dando cuenta de haber observado, en esa esquina, a dos sujetos que agredían, con cuchillos -en plural-, a un tercero. En lo referente a este punto, el Inspector Rodrigo Henríquez Iturra manifestó, en lo pertinente, que a objeto de establecer la dinámica y responsables del hecho, se empadronaron a vecinos y residentes del sector, siendo uno de ellos un conserje, identificado como Rubén Ruiz Giraldo, colombiano, quien trabajaba en un edificio ubicado en la intersección de calles donde ocurrió el delito. Agregó, que este último indicó que residía en dicho complejo habitacional, y que a su vez trabajaba en el mismo como

conserje, con un turno que se extendía entre las 22:00 y las 8:00 horas; el 15 de febrero de 2022, en la madrugada, luego de realizar una ronda por el lugar, y al llegar a una caseta que “da” al portón de calle moneda, apreció una disputa entre tres sujetos, dos de los cuales agredían con armas cortopunzantes a un tercero, logrando este último zafarse y huir por calle Moneda, en dirección al oriente, en tanto que los otros dos individuos que agredían huyeron por Moneda, al poniente. Puntualizó, que el testigo -Rubén Ruiz Giraldo- manifestó haberse acercado luego a la reja para seguir observando lo ocurrido, pese a lo cual no vio a ninguno de los tres sujetos, por lo que volvió a su turno; sin embargo, a las 6:00 horas -de la mañana- se percató de la presencia de un equipo de emergencia, pudiendo corroborar con una transeúnte que había un sujeto fallecido en el paso sobre nivel de calle Moneda, asociando dicho cuerpo a la agresión que había visto.

(ii) Cabe destacar que, adicionalmente a los dichos del conserje Rubén Ruiz Giraldo, introducido en la forma ya mencionada, se incorporó material visual concerniente a la agresión sufrida por la víctima por parte de sus dos hechores, lo cual otorga corroboración a tales asertos, pues precisamente muestra una dinámica de ataque sustancialmente coincidente con aquella descrita por el señalado testigo presencial.

Sobre este punto, huelga mencionar que, según el Inspector Rodrigo Henríquez Iturra, una parte del equipo investigativo efectuó un rastreo de las cámaras, para así obtener registros fílmicos, levantándose una que estaba emplazada en Manuel Rodríguez N° 90, la cual apuntaba al lugar del hecho. Añadió, que al efectuar un análisis de las grabaciones se veía a dos sujetos transitando por Manuel Rodríguez, calzada poniente, de norte a sur, quienes al llegar a calle Moneda giraron en dirección al poniente, agrediendo a una tercera persona, la cual logró zafarse y huir por calle Moneda, en dirección al oriente, hasta llegar a un paso sobre nivel, en tanto que los sujetos -que atacaron al ofendido- huyeron por Moneda al poniente, girando luego al norte por Almirante Barroso.

En cuanto a este último particular, resulta especialmente relevante la prueba material consistente en un DVD contenedor de grabaciones del Edificio Plaza Moneda, levantado bajo cadena de custodia NUE 6198149, exhibido tanto al último testigo policial mencionado como al Inspector Ignacio González Matta. En dicho material, y coherente con lo manifestado, durante su exhibición, por los dos deponentes antes mencionados, se logra apreciar, que el 15 de febrero de 2022, a las -según se registra en el video- 4:33 horas, dos

sujetos caminan por Avenida Manuel Rodríguez, vereda poniente, de norte a sur, quienes luego viran por calle Moneda, en dirección al poniente, pudiendo observarse, al cabo de unos segundos, que éstos agreden a una tercera persona, la cual logra huir, a las 4:33 horas con 58 segundos, por calle Moneda, en dirección al oriente, en tanto que sus dos atacantes corrieron por la misma calle, en la dirección contraria.

Asimismo, en lo tocante al mismo tópico, y otorgando información relevante en torno a la forma de comisión del hecho N° 1, se incorporó un DVD contenedor de grabaciones del Instituto INACAP, levantado bajo cadena de custodia NUE 6198150, exhibido a los Inspectores Rodrigo Henríquez Iturra y Nicolás López Leal. En el citado material se observa, coherente con lo indicado por los dos deponentes antes aludidos, que a las -según se registra en el video- 4:29 horas del 15 de febrero de 2022, la víctima transitaba por calle Moneda, vereda norte, en dirección al oriente, y que a eso de las 4:30 horas se encontró con dos sujetos, los cuales venían por Avenida Manuel Rodríguez, y que luego viraron por Moneda, en dirección al poniente, abalanzándose estos últimos sobre la primera, logrando el ofendido zafarse, a las 4:31 horas, huyendo por calle Moneda, al oriente. El mencionado video, además, permite apreciar la huida de los dos hechores, quienes corrieron por calle Moneda, hacia el poniente, doblando por calle Almirante Barroso, en dirección al norte; asimismo, posibilita observar las vestimentas de estos últimos, esto es, que uno de ellos lo hacía con ropas enteramente oscuras y un gorro blanco, en tanto que el otro lo hacía con un polerón de distintos colores y un pantalón oscuro.

(iii) En este mismo orden de ideas, la dinámica ya descrita resulta plenamente compatible con la causa de fallecimiento del occiso, respecto de cuya determinación se contó con la declaración pericial de Vivian Bustos Baquerizo, médico legista del Servicio Médico Legal, quien practicó el correspondiente protocolo de autopsia de la víctima Darío Arévalo Galíndez. En efecto, y según dicha opinión experta, este último presentaba múltiples lesiones cortopunzantes atribuibles a la acción de terceros, siendo la de carácter mortal aquella situada a nivel del tórax anterior, específicamente sobre la tetilla izquierda, desencadenante de un hemotórax.

En efecto, y de conformidad con los asertos de la mencionada experta, en síntesis, el día 18 de febrero -de 2022-, efectuó la autopsia de un adulto joven que presentaba once lesiones cortopunzantes en su cuerpo, respecto de hechos que habían acontecido el día 15

de dicho mes. Agregó, que el examinado mantenía diez heridas cortopunzantes sobre el tronco, siete de ellas dorsales y, por lo mismo, indiscutiblemente producidas por la acción de un tercero, como asimismo, también presentaba una lesión cortopunzante una en la región del entrecejo. Puntualizó, que la lesión mortal se situaba sobre la tetilla izquierda, y consistía en una herida que medía 3,8 centímetros de largo, y que al efectuarse la autopsia pudo determinarse la existencia de una única zona con infiltrado hemorrágico a nivel de la quinta costilla izquierda, al haber penetrado el arma por la zona mamaria de ese lado, ingresando con tanta fuerza que incluso fracturó la costilla a ese nivel, atravesando completamente el lóbulo inferior izquierdo del pulmón.

Continuando con su declaración, la perita en cuestión señaló que la herida mortal llegó a la zona central de este pulmón -izquierdo-, cortando la segunda bifurcación del bronquio, produciendo una gran pérdida de sangre, ello sin perjuicio de que se constató un mecanismo combinado de muerte, pues también había inundación de sangre en el bronquio. Preciso, que las restantes heridas cortopunzantes no lograron penetrar la cavidad torácica ni el abdomen, por lo que no dañaron estructuras relevantes; de estas siete heridas, seis de ellas tenían una trayectoria hacia abajo, siendo el caso, además, que seis de ellas se dirigían hacia la derecha, distribución que sugiere, en primer lugar, una agresión rápida, en segundo lugar, una agresión en la cual el afectado cambió muy poco de posición y, en tercer lugar, que la mano que llevaba el arma se movió, en seis de las siete ocasiones, en la misma dirección. Adicionó, que el occiso, en la mitad inferior del cuerpo, presentaba placas de erosión en zonas salientes, las cuales eran indicativas de una caída descontrolada hacia el lado derecho, sobre un plano duro y áspero. En cuanto a sus conclusiones, la profesional manifestó que la causa de muerte correspondía a un hemotórax, derivado de la lesión cortopunzante toraco-pulmonar.

Con relación a la antedicha pericia, fueron incorporadas veintiséis (26) fotografías anexas al informe de autopsia N° RM-13AUT-480-22, de fecha 8 de marzo del 2022, exhibidas precisamente a la doctora Bustos Baquerizo, las cuales permitieron a estos jueces imponerse acerca de la diversidad de lesiones que presentaba el occiso, principalmente aquellas de naturaleza cortopunzante ubicadas a nivel de tórax anterior y posterior, así como también en la zona del entrecejo.

Por otro lado, y pese a que no fue un aspecto controvertido durante el juicio, fue incorporada prueba pericial, al tenor de lo preceptuado en el artículo 315 inciso segundo del Código Procesal Penal, la cual dio cuenta de la ausencia de alcohol en la sangre de la víctima. Sobre el particular, de acuerdo al informe de alcoholemia N° 13-SCL-OH-03277-22, de fecha 3 de marzo del 2022, emitido por el Servicio Médico Legal, y suscrito por la perito ejecutora Nancy Fuentes Barriga, se constató que la víctima Darío Arévalo Galíndez, cuya autopsia fue practicada por la doctora Vivian Bustos Baquerizo, presentaba 0,0 gramos de alcohol por mil de sangre.

2.- En cuanto a la circunstancia de que fueron los acusados los dos sujetos que lesionaron a la víctima con elementos cortopunzantes, produciendo su deceso:

(i) En lo concerniente al presente extremo, su acreditación se logró, de una parte, a partir de la reconstrucción del trayecto de los dos hechores, tanto de aquel que precedió a la agresión, como el correspondiente a su huida, luego de perpetrada aquella. Tal reconstrucción resultó probada a través de la recopilación de distintos registros de cámaras del sector, conforme dieron cuenta diversos testimonios prestados por funcionarios de la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones, lo cual fue debidamente graficado a través de la exhibición del material obtenido a partir de dichos registros. En estos últimos, es posible apreciar a dos sujetos que vestían, dentro de sus prendas más características, un gorro blanco con pompón y una parka negra, en el caso del primero de ellos, posteriormente identificado como Ricky Alfonso Barazarte Madera, y un polerón de color negro, blanco y gris, y un jockey azul, en lo atinente al segundo, más adelante individualizado como Armando José González León.

En este orden de ideas, e ilustrando, desde una panorámica global, tanto el lugar de comisión del delito como aquel en que se halló el cadáver del ofendido, como asimismo, la ruta de huida y llegada de los hechores y las vestimentas utilizadas por éstos, se incorporó un set fotográfico respecto del cual se incorporaron cinco (5) imágenes anexas al Informe Policial N° 592 de la Brigada de Homicidios Metropolitana, exhibidas al Inspector Henríquez Iturra.

(ii) Respecto a la ruta de huida de los atacantes, correspondientes éstos, según se señalará más adelante, a los dos acusados, los elementos de convicción incorporados a

estrados permiten establecer que la misma comienza, luego de la agresión, por calle Moneda, en dirección al poniente, finalizando en calle Maturana, comuna de Santiago.

Sobre este punto, el Inspector Rodríguez Iturra aseveró que posteriormente al hecho, y conforme se pudo reconstruir de acuerdo a los registros de cámaras de seguridad del sector, los dos sujetos huyeron por calle Moneda en dirección al poniente, girando al norte por calle Almirante Barroso, hasta la intersección con calle Agustinas, donde viran al poniente; seguidamente continúan por Agustinas hasta calle Cienfuegos, para así doblar al norte, hasta calle Huérfanos, donde giran al poniente, continuando su tránsito hasta Avenida Brasil. Agregó, que después viraron nuevamente al norte, hasta calle Santo Domingo, girando luego por Santo Domingo al poniente, hasta calle General Bustamante; en esta última giraron al sur, hasta Catedral, virando nuevamente al poniente, hasta calle Almirante González; en esta última, los individuos se dividieron, pues uno de ellos caminó por calle Cumming en dirección al norte, en tanto que el segundo lo hizo por una calle paralela a Cumming, también en dirección al norte, girando este último posteriormente en calle Rosas, al oriente, donde se juntó con el otro sujeto. Indicó, que luego ambos giraron en Avenida San Pablo al oriente, doblando por calle Maturana, en dirección al sur, siendo la última cámara que logra visualizarlos una que estaba ubicada en calle Maturana 793, a eso, aproximadamente, de las 4:49 horas. Preciso, que calle Maturana une de norte a sur San Pablo con Rosas, de tal manera que con la finalidad de determinar si acaso dichos sujetos salieron o no de calle Maturana, se levantó una cámara en calle Rosas, en un bloque horario extenso, pues en el caso de que éstos hubiesen salido de calle Maturana, en dirección al sur, ello se habría visualizado, situación que no ocurrió, pudiendo concluir que los individuos hicieron ingreso a algún domicilio emplazado en calle Maturana, entre San Pablo y Rosas.

Este último deponente, además, dio cuenta de las distintas prendas que, acorde a las grabaciones de cámaras, vestían los mencionados sujetos, desde la perpetración del hecho hasta que son perdidos de vista en calle Maturana. Con respecto a este tópico, indicó que gracias al levantamiento de cámaras se establecieron las vestimentas de los imputados, sin perjuicio de que por el horario no había mayor tránsito peatonal. Agregó, que el primero de los individuos, posteriormente individualizado como Ricky Barazarte Madera, vestía un gorro blanco de lana con pompón en su extremo, mascarilla facial, una chaqueta negra acolchada, pantalón oscuro y zapatillas oscuras; el segundo, por su parte, más adelante

individualizado como Armando González León, llevaba un gorro tipo jockey, con visera plana de color azul, polerón con capucha con tres franjas horizontales, siendo la del tercio superior de color oscuro, la del tercio medio blanca, y la del tercio inferior gris, pantalón oscuro, y zapatos oscuros con tonalidades claras.

En este mismo orden de ideas, fueron incorporados, mediante su exhibición, los distintos registros visuales, extraídos de las cámaras de seguridad del sector, los cuales permiten reconstruir la referida ruta de huida de los acusados y las vestimentas que éstos llevaban, estas últimas plenamente coincidentes con las recientemente mencionadas.

En efecto, mediante el DVD contenedor de grabaciones del conjunto habitacional ubicado en Agustinas N° 1878, levantado bajo cadena de custodia NUE 6198151, exhibido tanto al Inspector Henríquez Iturra como a la Subcomisaria Rocío González Valenzuela, se observa, de forma plenamente concordante con lo declarado por ambos testigos, que aproximadamente a las 4:30 horas del 15 de febrero de 2022, los dos sujetos se desplazaron por dicha calle, al poniente, para luego girar por calle Cienfuegos, al norte.

Asimismo, mediante el DVD contenedor de grabaciones del restaurant Las Vacas Locas, levantado bajo cadena de custodia NUE 6198153, exhibido al Comisario David Villagrán Villagrán, se observa, de forma plenamente concordante a lo declarado por dicho testigo, que los dos sujetos transitan por el exterior de dicho restaurant, hacia el norte, precisando el mencionado deponente que si bien en el video se indica que eran las 3:10 horas, el registro tenía un desfase de, aproximadamente, una hora y veintidós minutos de retraso, de modo que, en realidad, eran las 4:32 de la madrugada del día 15 de febrero de 2022.

De igual manera, el DVD contenedor de grabaciones del Edificio La Reconquista, levantado bajo cadena de custodia NUE 6198154, exhibido a la Subcomisaria Rocío González Valenzuela, ubicado, según preciso dicha testigo, en calle Huérfanos, se logra apreciar, de forma plenamente concordante con lo declarado por la aludida deponente, que ambos sujetos, a las 4:42 horas -según se indica en el registro, caminan por dicha arteria, logrando tener una visión frontal de los mismos. En la grabación se puede que uno de los sujetos viste enteramente de negro, usa mascarilla y lleva un gorro blanco con pompón, en tanto que el otro lleva un polerón con los tres colores ya indicados, un pantalón negro y un jockey azul que tiene una especie de “A” en su parte anterior. Asimismo, desde el mismo

lugar, pero a través de otra cámara, se visualiza, a la misma hora mencionada, a los dos sujetos de espalda, pudiendo observarse con mayor claridad aquél que lleva jockey azul, correspondiente al último de los individuos mencionados.

Continuando con la ruta de huida, fue incorporado un DVD contenedor de grabaciones del colegio Marista, levantado bajo cadena de custodia NUE 6198156, exhibido al Inspector Patricio Barrios Toledo. En dicho registro se aprecia, de forma plenamente concordante con lo declarado por dicho testigo, que a las 4:38 de la madrugada, sin desfase horario conforme lo aseveró el mencionado deponente, que los dos sujetos transitan por calle Santo Domingo, de oriente a poniente, quienes al llegar a la esquina doblan al sur, siendo perdidos de vista dado el ángulo de la cámara.

Adicionalmente, a través de un DVD contenedor de grabaciones del edificio Plaza Centro, levantado bajo cadena de custodia NUE 6198157, exhibido al Comisario David Villagrán Villagrán, se aprecia, de forma plenamente concordante con lo relatado por dicho testigo, que a las 4:38 horas, con un desfase -conforme lo aseveró la mencionada deponente- de dos minutos, los dos sujetos tantas veces referidos caminaron por la vereda norte de calle Catedral, hacia el poniente.

En este mismo contexto, se introdujo un (01) DVD contenedor de grabaciones ubicadas en calle Rosas N° 2393, levantado bajo cadena de custodia NUE 6198118, exhibidos al Comisario David Villagrán Villagrán, en el cual se aprecia, de forma plenamente concordante con lo relatado por dicho testigo, que en la mencionada calle, esquina General Bulnes, el 15 de febrero de 2022, a las 4:40 -según indica la grabación-, y con un desfase de cinco minutos de retraso conforme lo aseveró el aludido deponente, transitar en forma solitaria, por Rosas, al sujeto 2 -posteriormente individualizado como Armando González León-, quien venía desde General Bulnes, en dirección al oriente.

En este mismo orden de ideas, mediante un DVD contenedor de grabaciones ubicadas en calle Ricardo Cumming N° 690, levantado bajo cadena de custodia NUE 6198134, exhibido a la Inspectora Joseline Becerra Becerra, se aprecia, de forma plenamente concordante con lo declarado por dicha testigo, que a las 4:51 horas -según aparece en el registro-, aunque con un desfase aproximado de cinco minutos, al sujeto que vestía enteramente de negro y que llevaba un gorro blanco, quien transitaba en solitario (cámara 7); asimismo, se ve a idéntico individuo, captado por una cámara con visión hacia

el norte, caminando en solitario por calle Cumming (cámara 8); y, por último, se observa a ambos sujetos, caminando por separado y en sentido contrario uno del otro, juntándose en la referida calle, para luego transitar los dos en dirección al oriente (cámara 6).

Adicionalmente, mediante un DVD contenedor de grabaciones ubicadas en calle Maturana N° 793, levantado bajo cadena de custodia NUE 6198120, exhibido a la Subcomisaria Sagery Gómez Taylor y al Inspector Rodrigo Henríquez Iturra, se aprecia, de forma concordante con lo aseverado por tales deponentes, transitando a ambos sujetos por calle San Pablo, de poniente a oriente, quienes giran al sur por la calzada poniente en calle Maturana, prácticamente llegando, conforme se determinó en virtud a las diligencias investigativas practicadas con posterioridad a su domicilio.

(iii) Al igual que la reconstrucción de la ruta de huida de los acusados, también logró establecerse, a través del análisis de las grabaciones de las cámaras de seguridad del sector, correspondientes a la madrugada del 15 de febrero de 2022, cuál fue el trayecto que posibilitó su llegada al lugar de comisión del ilícito.

En tal sentido, el Inspector Rodrigo Henríquez Iturra atestiguó, en lo que para estos efectos interesa, que mientras se efectuaban diversas diligencias relacionadas con el delito, otro equipo investigativo, con múltiples funcionarios, pudo determinar la ruta de llegada de los imputados al sitio del suceso, esto es, desde la ocurrencia del ilícito hacia atrás. Agregó, que logró establecerse que los sujetos llegaron -al sitio del suceso- por calle Manuel Rodríguez, de norte a sur, por la calzada poniente, derivados de calle Santo Domingo, esto último producto del tránsito por calle San Martín, de norte a sur; a esta última llegaron producto de transitar por calle Rosas, de oriente a poniente; a su vez, llegaron a calle Rosas, producto de transitar por calle Morandé, de norte a sur.

Es así, como a través de un DVD contenedor de grabaciones ubicadas en calle Manuel Rodríguez Norte N° 558, levantado bajo cadena de custodia NUE 6198140, exhibido al Comisario Luis Espinoza González, se aprecia, de forma concordante con lo aseverado por dicho testigo, que a las 4:21 horas, los dos sujetos transitaron por calle Santo Domingo, quienes, en la esquina con Avenida Manuel Rodríguez, viraron por esta última arteria, hacia el sur, los cuales, además, vestían las mismas prendas ya mencionadas anteriormente.

Del mismo modo, también permite graficar un segmento del trayecto de llegada de los hechos un DVD contenedor de grabaciones ubicadas en calle Morandé N° 917, levantado bajo cadena de custodia NUE 6198142, exhibido a la testigo civil Julia Gómez Ninanya, quien, según se explicará más adelante, reconoció, durante la investigación, al mostrársele unas imágenes, al sujeto que, en los diversos registros de video, aparece vistiendo un polerón de color negro, blanco y gris y un jockey azul, correspondiente al acusado Armando González León. En tales registros, concernientes a la ubicación antes mencionada, se observa a ambos sujetos caminando.

Adicionalmente, a través de un DVD contenedor de grabaciones ubicadas en la Unidad Interpol Santiago, levantado bajo cadena de custodia NUE 6198148, exhibido a la Subcomisaria Sagery Gómez Taylor, se aprecia, de una forma concordante con lo atestiguado por dicha deponente, a las 4:09 horas -según indica el registro de cámaras-, que ambos sujetos circulan por la vereda oriente de calle Independencia, en dirección al sur.

Especialmente relevante resulta la incorporación de un DVD contenedor de grabaciones ubicadas en calle La Paz N° 123, levantado bajo cadena de custodia NUE 6198143, exhibido al Inspector Rodrigo Henríquez Iturra. En el mismo se aprecia, de una forma plenamente concordante con lo relatado por dicho deponente, a las 2:55 horas, con un desfase -según lo manifestó el aludido testigo- de una hora de retraso, caminando a los dos sujetos en comento, con la particularidad de que el individuo que posteriormente es individualizado como Ricky Barazarte Madera, en lugar de vestir un pantalón negro, aparece llevando, en esa franja horaria, un pantalón claro. Acto seguido, se observa que este último sujeto, mientras transita, extrae desde sus pertenencias un pantalón oscuro y se lo coloca mientras sigue caminando, por sobre su pantalón blanco, lo cual explica que, en adelante, esa sea la tonalidad de dicha prenda inferior .

Igualmente, mediante un DVD contenedor de grabaciones ubicadas en calle San Pablo N° 1539, levantado bajo cadena de custodia NUE 6198147, exhibido al Inspector Sebastián Guzmán Díaz, se aprecia, de forma concordante a lo relatado por dicho deponente, que a las 3:43 horas, ambos sujetos caminan por la aludida arteria, en dirección al sur. En dicho registro, además, se aprecia que el sujeto posteriormente individualizado como Ricky Barazarte Madera aún viste el pantalón claro, previo al cambio que efectuó de esa prenda, conforme se graficó en el video anterior.

Finalmente, a través de un DVD contenedor de grabaciones ubicadas en calle Maturana N° 793, levantado bajo cadena de custodia NUE 6198144, exhibido al Inspector Rodrigo Henríquez Iturra, se observa, de un modo concordante con lo aseverado por dicho deponente, a las 3:38 horas -según registro de cámara- aunque adelantada en cinco minutos conforme al referido testigo policial, a dos sujetos circulando por Maturana, por la acera poniente, quienes luego giran por San Pablo, en dirección al oriente. En el mencionado video se aprecia que el individuo que posteriormente es individualizado como Ricky Barazarte Madera viste un pantalón de color blanco.

(iv) La reconstrucción de tales trayectos, particularmente el de huida, el cual finalizó, como ya se indicó, en calle Maturana, entre San Pablo y Rosas, comuna de Santiago, dio pie a la realización de una serie de diligencias en dicho sector, las cuales contribuyeron, más adelante, a establecer el lugar de residencia de los acusados.

En efecto, y conforme lo aseveró el Inspector Rodrigo Henríquez Iturra, se efectuaron vigilancias en el sector precedentemente mencionado, pudiendo constatarse la existencia de inmuebles tipo cité habitados por personas extranjeras, contexto en el cual se tomó con una mujer de nacionalidad peruana, individualizada como Julia Gómez Ninanya, la que precisamente tenía domicilio en calle Maturana y mantenía, además, en el mismo lugar, un minimarket. Agregó el citado oficial policial, que dicha ciudadana afirmó que podía reconocer a los residentes del sector, ante lo cual se le exhibieron capturas de pantalla, mediante acta de reconocimiento en video, indicando ésta que el sujeto número dos, es decir, el que, conforme a las grabaciones analizadas, vestía un jockey y polerón con franjas horizontales -posteriormente individualizado como Armando José González León-, era un individuo que vivía en el cité emplazado frente a su domicilio, que tenía fachada color rosado y una puerta metálica gris. Adicionó, el Inspector Henríquez Iturra, que así logró establecerse que el domicilio de interés criminalístico, esto es, aquel desde el cual habrían salido y llegado los imputados, se encontraba ubicado en calle Maturana 781, por lo que se efectuaron vigilancias en dicho inmueble, corroborándose, en el lugar, la presencia de personas de nacionalidad extranjera, las que, sin embargo, salían en distintos bloques horarios, no logrando visualizarse, en principio, ninguna persona de interés para la investigación.

Es dable señalar, adicionalmente, que la mujer antes mencionada prestó testimonio en estrados, de forma sustancialmente concordante con el relato que, de oídas, introdujo el Inspector Henríquez Iturra, sin perjuicio de lo cual ésta, además, sindicó en estrados al acusado Armando José González León, como el individuo que ella reconoció en las imágenes que, en su oportunidad, fueron exhibidas por personal policial.

En lo tocante a esto último, Julia Gómez Ninanya refirió, en síntesis, que anteriormente vivió en calle Maturana, y que un día, el 14 o 15 de febrero de 2022, fue a su domicilio una persona de la “PDI”, preguntándole si podía reconocer a alguna persona que aparecía en una imagen; al enseñársela, a través de una cámara de video, pudo reconocer, por sus características, a uno de los sujetos, el cual vivía al frente, en una casa “tomada”. Cabe señalar, además, que a la misma deponente se le exhibió, según ya se adelantó, un DVD contenedor de grabaciones ubicadas en calle Morandé N° 917, levantado bajo cadena de custodia NUE 6198142, indicando ésta que la persona a la que reconocía correspondía al caballero que vestía un pantalón de buzo negro, un polerón con franjas y una gorra que le tapaba la cabeza. Asimismo, al ser consultada sobre si la persona que reconoció en las imágenes se encontraba presente en la sala de audiencias, la testigo respondió afirmativamente, sindicando como tal al encausado González León.

(v) Siempre en el contexto de las actuaciones investigativas que permitieron la determinación de los dos partícipes del delito, es menester relevar que el personal policial tomó conocimiento de un suceso perpetrado el 16 de febrero de 2022, esto es, al día siguiente de la comisión del hecho N°1, el cual presentaba similitudes con este último, y que, como se señalará, corresponde al evento N° 2 de la acusación fiscal. Tal antecedente, unido a la ubicación del lugar desde el cual habrían salido -y llegado-, de acuerdo al análisis de las cámaras de seguridad del sector, los dos sujetos que acometieron al afectado, unido a lo señalado por la ciudadana Julia Gómez Ninanya, en orden a que uno de los individuos captados por dichos registros visuales vivía al frente suyo, esto es, en calle Maturana 781, comuna de Santiago, personal policial efectuó un control migratorio en dicho inmueble. Esta última actuación posibilitó, en lo que aquí interesa, que el equipo investigativo, de una parte, tomara contacto, entre otras personas, con un individuo que mantenía características físicas similares a uno de aquellos que aparecían en las grabaciones, a quien se le identificó, en esa oportunidad, como Armando José González

León; de otra parte, tal personal constató la existencia, en el lugar, de un sinnúmero de cuchillos, cuestión que dio paso al diligenciamiento y obtención de una autorización judicial para entra y registrar las dependencias del inmueble.

Sobre este particular, el Inspector Henríquez Iturra afirmó, en lo pertinente, que de forma paralela el Subcomisario Poo recibió antecedentes de un robo con violencia cometido en contra de una pareja durante la madrugada del 16 de febrero de 2022, en Catedral 1772, comuna de Santiago. Agregó, que teniendo en cuenta el domicilio ya indicado -Maturana N° 781-, se realizó una coordinación con funcionarios del Departamento de Migración, para efectos de practicar un control migratorio en Maturana 781, ello a fin de establecer la situación de sus residentes, diligencia que, en definitiva, fue realizada en la mañana del día 21 de febrero de 2022. Puntualizó que en la misma, diversos oficiales tomaron contacto con el encargado del lugar, quien firmó el acta respectiva autorizando el ingreso al domicilio, saliendo todos sus habitantes a un patio común del cité, estableciéndose que, a lo menos, allí residían quince personas de nacionalidad venezolana. Adicionó, que mientras se desarrollaba el control migratorio advirtieron que uno de los sujetos que se encontraba en el patio común tenía características físicas similares a las que se veían en los registros visuales, como asimismo, se observó, en el lugar, la existencia de múltiples elementos cortopunzantes tipo cuchillos. Precisó, que en virtud de lo anterior, sumado a la declaración de la testigo -Julia Gómez Ninanya-, la cual reconoció a uno de los sujetos -de las imágenes que se le exhibieron- como residente de dicho cité, se tomó contacto con el fiscal Francisco Jacir, para obtener el diligenciamiento de una autorización judicial para registrar las dependencias del cité, ello a objeto de determinar los hechos y vestimentas utilizadas en los delitos investigados, la cual fue otorgada por la jueza de turno del Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago el mismo día 21 de febrero.

Conviene remarcar que en lo que concierne al sujeto, habitante del aludido cité, que, conforme a los asertos del Inspector Henríquez Iturra, mantenía características físicas similares a uno de los dos que se apreciaban en los registros visuales analizados con motivo del hecho N° 1, el mismo se corresponde al acusado González León. Lo anterior, pues dicha información ha de ser complementada con los asertos del Subcomisario Rodrigo Poo Astudillo, quien aseveró que, en el marco de la diligencia efectuada en el señalado domicilio, pudo verificar que uno de los residentes llevaba las mismas zapatillas que

mantenía uno de los individuos que se observaban en los registros analizados, siendo este último identificado como Armando José González León.

(vi) Al ejecutarse la autorización de entrada y registro de las dependencias del cité en comento, específicamente, de tres de sus habitaciones, las cuales fueron asociadas, precisamente, a los dos acusados del hecho N° 1, así como también a un sujeto de interés respecto al hecho N° 2, todos ellos moradores de dicho inmueble y quienes, además, se encontraban en situación migratoria irregular, se recopiló diversa evidencia que vinculaba directamente a Ricky Barazarte Madera y a Armando González León con el ilícito perpetrado el 15 de febrero de 2022. Específicamente, y entre otros elementos de interés para la averiguación de dicho delito, se hallaron vestimentas de las características de aquellas que usaban, conforme al material de video a que se ha hecho referencia, los dos hechores del suceso en comento, esto es, respectivamente, un gorro de lana blanco con pompón y una parka negra, como asimismo, un polerón con franjas de color negro, gris y blanco. A mayor abundamiento, las dos últimas prendas indicadas mantenían manchas pardo rojizas, las cuales, al ser sometidas a los análisis bioquímicos correspondientes, conforme se expondrá, correspondían precisamente a sangre del fallecido Darío Arévalo Galíndez.

En tal sentido, el Inspector Henríquez Iturra manifestó que la autorización judicial en cuestión fue ejecutada a las 10:36 horas del día 21 de febrero, logrando establecerse, a través de la misma, que habían tres habitaciones de importancia para la investigación, cada una asociada a un residente del inmueble, todos de nacionalidad venezolana y mayores de edad. Agregó, que la signada con el N°1 estaba asociada al imputado Ricky Barazarte Madera; la N°2, en tanto, a Armando González León; y la N°3, por su parte, a un imputado llamado Jhonny Yonier Dudamel Dudamel. Puntualizó, que desde la habitación N° 1 se levantaron diversas vestimentas y elementos asociados al delito, tales como cuchillos, como asimismo, un pantalón largo blanco, el cual reunía las mismas características que, en un principio, utilizaba el imputado el día de comisión del delito del robo con homicidio, cuando salió del inmueble de Maturana. Puntualizó, que respecto de la habitación N° 2, aparte de cuchillos que se levantaron desde el lugar, se encontró, al interior de una mochila, una chaqueta negra acolchada de características similares a la utilizada por uno de los imputados al momento de la perpetración del robo con homicidio, un polerón con capucha,

con franjas horizontales, oscuras hacia la parte superior, blancas al medio y gris en la parte inferior, con manchas de color pardo rojizas, mismas vestimentas que se lograban visualizar en los registros visuales de cámaras de seguridad de ese hecho. Añadió, finalmente, que en la habitación signada como N° 3, asociada a Jhonny Dudamel Dudamel, fue encontrado un gorro blanco de lana con pompón y unas zapatillas de color rojo.

Cabe señalar, además, que ilustrando las características y numeración del inmueble respecto del cual se ejecutó la mencionada autorización judicial, y del frontis del domicilio situado en la numeración 795 de calle Maturana, así como también, de las diversas evidencias halladas en las habitaciones asociadas a los dos acusados y al tercer sujeto de interés para el hecho N° 2, se introdujo la declaración de Mónica Novoa González, perito fotógrafa del Laboratorio de Criminalística de la Policía de Investigaciones de Chile. Acorde a sus asertos, en resumen, el día 21 febrero de 2022 concurrió a calle Maturana N° 781 y N° 795, a objeto de realizar un peritaje fotográfico. Agregó, que en el frontis de la dirección 795, fijó dos cámaras de seguridad, en tanto que respecto del inmueble N° 781 fijó su exterior, interior y la evidencia que allí se encontró. Puntualizó, que la diligencia fue practicada entre las 12:00 y las 4:00 de la tarde, correspondiendo el último de los domicilios a un inmueble de fachada continua, con distintas habitaciones que eran utilizadas como dormitorios; en cuanto a las evidencias que fueron fijadas en este domicilio, las mismas consistieron en vestimentas, mochilas, cuchillos y zapatillas, además de otras que iban apareciendo.

De igual modo, y permitiendo a estos jueces imponerse acerca de las características del inmueble en que fue ejecutada la autorización judicial de entrada y registro, su fachada, las distintas dependencias que la componían y la evidencia recopilada desde su interior, se introdujo un set de ciento cinco (105) imágenes anexas al informe pericial fotográfico N° 414-022, exhibido a la perito fotógrafa precedentemente señalada. Dentro de dichas imágenes, correspondientes a las habitaciones asociadas a los acusados y al coimputado Dudamel Dudamel, resultan especialmente relevantes aquellas en que se aprecia una parka negra de las características de la que vestía uno de los hechores, en la cual, de acuerdo al análisis bioquímico, según se expondrá más adelante, fue encontrada sangre del occiso (fotografías 60 a 62); aquellas en que se observa el polerón con franjas de las características del que vestía el otro atacante, el que también mantenía sangre que, conforme al examen

pericial respectivo, correspondía a David Arévalo (fotografías 63 a 71); las que muestran el gorro blanco de lana, con pompón, de las mismas características de aquel que llevaba el individuo que vestía una parka negra (fotografías 88 a 90); y en las que se observa un pantalón blanco que resulta ser similar a aquel que, en primera instancia, llevaba el sujeto que vestía parka negra y gorro blanco con pompón (imágenes 22 y 23).

En términos similares, y siempre en lo referente a las evidencias incautadas desde el domicilio de calle Maturana N° 781, con motivo de la autorización judicial de entrada y registro ejecutada con fecha 21 de febrero de 2022, y específicamente en lo relacionado con el hecho ahora analizado, resultó del todo ilustrativa la introducción de los tres sets de imágenes que a continuación se señalarán. En primer término, el set respecto del cual fueron incorporadas treinta y tres (33) fotografías, correspondiente a la habitación N°1-asociada a Barazarte Madera-, exhibido al Inspector Henríquez Iturra, particularmente la imagen 24, en que se aprecia el pantalón blanco que, de acuerdo a los registros visuales analizados, vestía uno de los hechores en forma previa a la comisión del ilícito. En segundo término, el set respecto del cual se introdujeron treinta y cuatro (34) fotografías correspondiente a la habitación N°2, exhibido a los Inspectores Henríquez Iturra y Becerra Becerra, particularmente las imágenes 23 y 24, de un lado, y 20 y 21, del otro, en las que se aprecian, respectivamente, la característica parka negra y el polerón con franjas que vistieron, en la parte superior, cada uno de los hechores, y que además mantenían, de acuerdo al análisis bioquímico, según se expondrá, sangre del fallecido. Y, en tercer término, el set fotográfico respecto del cual se introdujeron dieciséis (16) imágenes correspondientes a la habitación N°3 -asociada al coimputado Dudamel Dudamel-, exhibido a los Inspectores Henríquez Iturra y López Leal, particularmente las fotografías 16 y 17, que capturan el gorro de lana blanco con pompón, prenda característica que fue utilizada por uno de los autores del evento perpetrado el 15 de febrero de 2022.

Adicionalmente, es dable mencionar un elemento que aunque por sí solo no permite establecer la vinculación de los acusados en el hecho N° 1, de igual manera constituye un indicio que, aunado a las probanzas analizadas en este acápite, no hace más que afianzar su intervención, muy particularmente en lo atinente al imputado González León, pues concierne a unas de las prendas características que, conforme a las grabaciones ya mencionadas, llevaba uno de los atacantes. En torno a este punto, la Subcomisaria Rocío

González Valenzuela afirmó haber tomado declaración, en el marco de la investigación, a Douglas Hernández, venezolana, quien habitaba una de las piezas del cité, la cual aseveró que en días anteriores un sujeto que también vivía en el lugar, de nombre Armando, le prestó a su pareja, llamada Jesús, un gorro tipo jockey con visera plana, con una especie de “A” en la parte anterior. Agregó la Subcomisaria González Valenzuela que al consultarle a dicha ciudadana acerca del gorro, ésta contestó que dado que estaba sucio ella lo había lavado, y que luego quedó para el secado, ya que entre los hombres acostumbraban a prestarse ropa. Precisó la deponente policial que, según las imágenes, ese gorro pertenecería a Armando González, teniendo todo ello concordancia con lo que describió la testigo Douglas Hernández.

Incluso más, y otorgando plena corroboración al hallazgo de las vestimentas antes mencionadas, se introdujo, mediante su exhibición al Inspector Nicolás López Leal, en carácter de evidencia material, un gorro de lana blanco, NUE 6372965. Asimismo, se incorporó, también como prueba material, exhibidas al Inspector Henríquez Iturra, una parka negra y un polerón con franjas, ambos incautados desde la habitación asociada a Armando José González León, NUE 4673110, así como también, una chaqueta negra sin marca visible, un par de zapatillas marca Jordan y un pantalón blanco marca Seventbird, incautados desde la habitación asociada al imputado Ricky Alfonso Barazarte Madera y levantados bajo cadena de custodia NUE 6372964.

Finalmente, e ilustrando al Tribunal respecto de las distintas dependencias y lugares desde los cuales fueron incautadas las evidencias recolectadas con motivo de la ejecución de la autorización de entrada y registro practicada, con fecha 21 de febrero de 2021, en el cité ubicado en calle Maturana 781, comuna de Santiago, se contó con la declaración de Claudia Mera Muñoz, perito de la sección Dibujo y Planimetría del Laboratorio de Criminalística de la Policía de Investigaciones de Chile. Dicha profesional, en síntesis, dio cuenta de haber efectuado, el 21 de febrero 2022, aproximadamente al mediodía, un informe de concurrencia en Maturana 781, comuna de Santiago, junto a personal de la Brigada de Homicidios y un equipo levantador de evidencia del laboratorio. Agregó, que se realizó una fijación fotográfica y planimétrica del lugar, incluyendo las diversas habitaciones, pasillo y una especie de hall con cocina existente en el inmueble. Puntualizó, que se fijaron diversas prendas, mochilas, celulares y cuchillos, como asimismo, en unas

habitaciones que existían al fondo del pasillo, distintas prendas tales como unas zapatillas marca Nike, color negro y rojo, un polerón con franjas color negro gris y blanco, y un gorro de lana. Indicó, además, que luego de realizada dicha fijación confeccionó un croquis del lugar. Con respecto a esto último, y permitiendo al Tribunal imponerse respecto de las distintas habitaciones y lugares en que se hallaron las evidencias mencionadas en este acápite, se incorporó un croquis de plano, anexo al informe pericial de dibujo y planimetría N° 619/2022, exhibido a la profesional precedentemente mencionada.

(vii) Como corolario de todo lo anterior, y tal como se anticipó, fue incorporada prueba de índole científico que, ciertamente, reforzó la convicción del Tribunal en orden a la vinculación de los dos acusados con el hecho N° 1, al determinarse la presencia, en dos prendas levantadas desde las habitaciones antes mencionadas, específicamente una parka de color negro y un polerón con tres franjas horizontales de color negro, blanco y gris, de sangre correspondiente al fallecido Darío Arévalo Galíndez. Tales vestimentas, según ya ha sido señalado en reiteradas ocasiones, corresponden a aquellas que, conforme a los análisis de las grabaciones a que se ha hecho referencia, los dos autores del delito llevaban en su parte superior. En este orden de ideas, la mencionada prueba científica, enlazada con el reconocimiento efectuado por la ciudadana peruana Julia Gómez Ninanya, en orden a que el sujeto que llevaba polerón con franjas y pantalón oscuro correspondía al imputado González León, permite concluir, de forma contundente, que además de este último, el otro partícipe del ilícito correspondió a Ricky Barazarte Madera, el cual se corresponde con el individuo que, al momento de su perpetración, vestía enteramente de negro y mantenía un gorro blanco con pompón.

Con relación al análisis bioquímico antes mencionado, el perito Cristian Santander Sepúlveda, indicó, en resumen, que elaboró el informe bioquímico N° 287/022, fechado el 2 de septiembre del 2022, respecto del cual se habían remitido unas evidencias a objeto de, en lo posible, obtener material biológico humano, huellas genéticas y, en su caso, realizar las comparaciones respectivas. Agregó que realizadas las pruebas de extracción de ADN, cuantificación del mismo, amplificación de los marcadores genéticos, obtención de huellas genéticas y de análisis de las huellas genéticas que eran útiles para comparación, se arribó, en lo pertinente, a los siguientes resultados. De una parte, que era 700 trillones de veces más probable que la sangre humana hallada en la muestra “MPR polerón”, “MPR parka 1”,

y “MPR mascarilla” proviniesen del occiso NN, a que no proviniese de él. De otra parte, que el material biológico humano hallado en la muestra “barrido hoja cuchillo 3” y “barrido parka 1” presentaban un genotipo masculino, siendo sus huellas genéticas coincidentes entre sí, pero en todo caso diferentes a las de David Fuenzalida Campos y del occiso NN.

Continuando con sus conclusiones, el bioquímico Santander Sepúlveda señaló, asimismo, que la sangre humana hallada en las muestras “MPR zapatilla 1”, “barrido interno zapatilla 1”, “barrido parka 3” y “barrido gorro” también presentaban un genotipo masculino coincidente entre sí, consignado como “individuo masculino 1”, pero que éste, a su vez, era diferente al obtenido respecto de David Fuenzalida Campos, del occiso NN y del individuo masculino 1, quedando consignado como “individuo masculino 2”. Indicó, además, que era dable concluir que la sangre humana hallada en el pantalón corto, muestra signada como “MPR pantalón corto”, así como el material biológico humano encontrada en las muestras “barrido cuchillo 4”, “barrido pantalón blanco” y “barrido pantalón corto” presentaban un genotipo masculino, pero éste a su vez, era diferente del obtenido para todos los anteriormente nombrados, quedando consignado como “individuo masculino 3”. Aún en lo referente a sus conclusiones, el profesional señaló que el material biológico hallado en la “muestra barrido hoja cuchillo 2” presentaba una mezcla de huellas genéticas de, al menos tres individuos, observándose la contribución, en dicha mezcla, de la huella genética del individuo masculino 2 y, de a lo menos, dos individuos más, distintos a todos los anteriormente nombrados. Añadió, que a partir del material biológico encontrado en la muestra “barrido hoja cuchillo 4”, la misma también arrojó una mezcla de huellas genéticas de tres contribuyentes, diferentes de la de todos los individuos anteriormente mencionados.

3.- Falta de acreditación en torno a la finalidad apropiatoria con que, de acuerdo a la imputación fiscal, habrían actuado los acusados:

(i) Conforme al libelo acusatorio, los imputados Barazarte Madera y González León apuñalaron a la víctima “con el objeto de sustraer sus pertenencias, y al oponer resistencia (...)”, extremo que, conforme al parecer de esta sala, no logró ser establecido a través de la prueba de cargo.

En tal sentido, conforme ya se indicó, el testigo presencial Rubén Ruiz Giraldo, conserje de un edificio ubicado en la intersección de calle Moneda con Avenida Manuel Rodríguez, lugar de ocurrencia del hecho examinado, dio cuenta de haber observado, en sus

palabras, una disputa entre tres sujetos, dos de los cuales agredían con armas cortopunzantes a un tercero, quien logró zafarse de dicha agresión y huir. Tal testigo, según se consignó anteriormente, no compareció en forma personal a estrados a dar razón de sus dichos, sin perjuicio de lo cual su relato igualmente fue introducido a través del testimonio del Inspector Henríquez Iturra. De igual manera, el Subcomisario Roberto Poo Astudillo, también dio cuenta de los asertos de dicho deponente civil, indicando que éste señaló que aproximadamente a las 4:00 o 4:30 de la mañana -del 15 de febrero de 2022- había visto un incidente en el cual dos sujetos agredían con cuchillos a un tercero, quienes luego se dieron a la fuga del lugar.

Asimismo, cabe destacar, según ya fuera analizado anteriormente, que en lo referente a los registros visuales de la agresión se incorporó, de una parte, un DVD contenedor de grabaciones del Edificio Plaza Moneda, levantado bajo cadena de custodia NUE 6198149 y, de otra parte, un DVD contenedor de grabaciones del Instituto INACAP, levantado bajo cadena de custodia NUE 6198150. En dichos videos se aprecia que dos sujetos, durante un lapso inferior a un minuto, agreden a un tercero, luego de lo cual huyen.

Pues bien, estos jueces estiman que los elementos de cargo precedentemente señalados son inidóneos, para tener por acreditado que el actuar de los encausados estuviese enderezado a la sustracción de especies del ofendido. En efecto, de los dichos del conserje Rubén Ruiz Giraldo y de los registros de video correspondientes a tal hecho, no es posible extraer ningún elemento que permita inferir, más allá de toda duda razonable, que el móvil que impulsó la agresión estuviese relacionado con algún afán de índole apropiatorio. Ello por cuanto, de los asertos del mencionado testigo no se advierte ningún tipo de expresión utilizada por parte de los agresores, que revelase alguna finalidad de esa naturaleza, o la realización de alguna clase de registro corporal respecto del ofendido. De la misma forma, los registros visuales en comento tampoco permiten advertir algún tipo de comportamiento desplegado por los acusados enderezado a dicho propósito, sino que únicamente, y como bien lo señaló la defensa durante su alegato de clausura, revelan un actuar fugaz, en el cual éstos abordan a la víctima, la agreden y acto seguido se dan a la fuga del lugar.

Así las cosas, y pese a que el hecho de matar a otro, constitutivo, en términos típicos, de un delito de homicidio, muy probablemente se ve impulsado por algún tipo de motivación que dirige el accionar de él o los autores, no puede obviarse que recae sobre la

parte acusadora, coherente con la garantía de presunción de inocencia que ampara a todo imputado, la carga de acreditar, conforme al estándar legal, que en un caso como el ahora examinado la finalidad de éstos se corresponde, precisamente, con un afán de sustraer especies. Por lo mismo, resulta absolutamente insuficiente, de cara a tener por establecida la finalidad en cuestión, la mera circunstancia de que no hayan sido asentadas las razones últimas que rodearon al ataque desplegado por los acusados en contra del ofendido y que desencadenó su desenlace fatal.

(ii) Sin perjuicio de lo anterior, también cabe descartar cualquier posibilidad de tener por acreditado un eventual ánimo apropiatorio por parte de los encartados la existencia de un supuesto robo que habría tenido lugar en el contexto de su huida, el mismo 15 de febrero de 2022, luego de perpetrado el hecho en contra de David Arévalo.

En lo tocante a este tópico, es dable indicar que el Inspector Sebastián Guzmán Díaz refirió que dentro de las diligencias en que participó respecto del hecho investigado confeccionó tres cuadros gráficos, relacionándose, el segundo de ellos, con las grabaciones de seguridad de calle Catedral, correspondientes al seguimiento efectuado respecto de los dos imputados. Agregó, que dichos videos mostraban a los sujetos asaltando a una persona que no era la víctima que falleció, sino que alguien distinto de sexo masculino, quien fue abordado por los dos imputados.

Con relación a este punto, la Fiscalía incorporó un DVD contenedor de grabaciones del Edificio ubicado en calle Catedral N° 2351, levantado bajo cadena de custodia NUE 6198158. Al ser exhibido dicho registro al testigo antes mencionado, éste afirmó que en la intersección de calles que allí se muestra se visualiza el robo a una persona no identificada, cometido por parte de los dos sujetos que eran seguidos por las cámaras, específicamente, a las 4:30 de la madrugada del 15 de febrero de 2022.

Pues bien, estos jueces estiman que la anterior información no muta de modo alguno las conclusiones vertidas en este acápite en torno a la insuficiencia probatoria respecto al eventual ánimo apropiatorio que habría impulsado el accionar de los acusados a la hora de cometer el hecho N° 1.

En efecto, de una parte, no puede compartirse la idea de que un presunto ánimo apropiatorio posterior, dirigido en contra de una víctima distinta, y en un suceso diverso, tenga la virtualidad de llenar los vacíos existentes en la prueba de cargo respecto a cuál

habría sido la motivación que rodeó el actuar de los encausados en un hecho precedente, pues ciertamente una inferencia de ese orden no se aviene con un Derecho Penal de actos.

De otra parte, y con prescindencia del razonamiento anterior, el material visual no permite apreciar ningún comportamiento que, de forma más o menos precisa, revele algún accionar, desplegado por los acusados, dirigido a la apropiación de las especies de dicho transeúnte, al no observarse ningún tipo de registro de vestimentas u otra maniobra similar, sino que solamente el hecho de que aquél fue abordado por éstos. Tanto es así, que al ser consultado sobre el particular, por parte de la Fiscalía, el Inspector Guzmán Díaz respondió que no lograba distinguir cual era la actividad realizada por cada uno de los encartados. Lo anterior, se juzga de la mayor importancia, toda vez que, conforme lo admitió el Inspector Henríquez Iturra, la supuesta víctima en cuestión ni siquiera pudo ser identificada, de tal manera que tampoco se contó con su versión respecto a las expresiones o acciones desplegadas, a su respecto, por parte de los encausados. Con todo, es del caso mencionar que pese a que el Inspector Guzmán Díaz dio cuenta, dentro de las diligencias en que intervino, haber presenciado la declaración de una guardia de seguridad de nombre Silvia, quien habría observado un robo ocurrido ese mismo día que estaría relacionado con los imputados, lo cierto es que, además de dicha genérica referencia, éste no entregó ningún tipo de información específica sobre tal presunto suceso.

(iii) Finalmente, no mutan las anteriores conclusiones el contenido de las declaraciones prestadas por ambos acusados durante la fase investigativa, en las cuales éstos, en ausencia de abogado defensor, aunque sin que estos jueces advirtiesen alguna infracción a lo dispuesto en los artículos 91 y 194 del Código Procesal Penal, señalaron haber abordado al afectado con el objeto de robarle, pues se trata de la única información capaz de relacionarlos de forma más concreta con un propósito de esa naturaleza.

En lo concerniente a esta temática, es menester poner de relieve que conforme al Subcomisario Roberto Poo Astudillo, el día 21 de febrero de 2022, luego de haber hecho ingreso, con ocasión de la realización de un control migratorio a los residentes de cité emplazado en calle Maturana 481, comuna de Santiago, y que derivó en el diligenciamiento de una autorización judicial de entrada y registro de las dependencias de dicho inmueble, los dos acusados, así como también un tercer sujeto de interés respecto al hecho N° 2 - Jhonny Dudamel Dudamel-, manifestaron su interés de cooperar en la investigación.

Agregó el mencionado deponente que en atención a lo anterior, los tres imputados fueron trasladados a la Brigada de Homicidios Metropolitana, prestando allí, en presencia del fiscal Sebastián Fuenzalida, y previa lectura de derechos, sus respectivas declaraciones, participando en todas ellas el aludido testigo policial.

Conforme a la declaración de Ricky Barazarte Madera, el Subcomisario Poo Astudillo indicó que éste aseveró, en lo relevante para el hecho N° 1, que desde hacía fines de 2021 él residía en Maturana 781, Santiago, donde también vivían varios venezolanos, conociendo a algunos de ellos durante su proceso de migración. Agregó, en cuanto a los hechos, que Barazarte indicó que la semana anterior -al 21 de febrero de 2022-, pasada la medianoche, acompañó a otro venezolano que residía en el lugar, de nombre Armando, a comprar pasta base, concurriendo ambos al sector de Estación Cal y Canto, para lo cual caminaron por San Pablo; una vez que llegaron a las inmediaciones de la Estación Mapocho compraron la sustancia y posteriormente regresaron por una ruta distinta, ya que Armando conocía mejor las calles del centro. Puntualizó, que el referido imputado indicó que cuando caminaban por la caletería de la autopista, al llegar a la esquina de una calle perpendicular, divisaron a un sujeto que caminaba solo, a quien abordaron con intención de robarle, tomándolo él por la espalda, reteniéndolo, en tanto que su acompañante -Armando- usó un cuchillo para propinarle lesiones. Adicionó el testigo policial, que dicho encausado señaló que la víctima se soltó y caminó hacia la autopista, saliendo ellos -Barazarte Madera y González León- hacia el sector contrario, llegando después a su domicilio, no recordando si en el trayecto cometieron o no otro delito.

De otra parte, y en lo atinente a la declaración prestada por Armando González León, el Subcomisario Poo Astudillo aseveró que éste manifestó, en lo pertinente, que residía en el domicilio ubicado en calle Matucana 781, lugar en que también lo hacían distintas personas de nacionalidad venezolana. Agregó, que dicho encausado refirió que un día de la semana anterior -al 21 de febrero de 2022-, en horas de la madrugada, salió en compañía de Ricky a comprar marihuana, al sector de La Vega, desplazándose por San Pablo hasta Estación Mapocho y que, posteriormente, cuando llegaron a la esquina con calle Moneda, vieron a un sujeto solitario. Puntualizó que, por lo anterior, se acercaron y lo abordaron, forcejeando para robarle, pero como el “tipo” opuso resistente Ricky utilizó un

cuchillo y le dio múltiples lesiones por anterior y posterior; en ese momento él -González León- no andaba con cuchillo, y que se fue cuando vio que la víctima sangraba.

Pues bien, y pese a que en ambas declaraciones, prestadas en las condiciones ya descritas, los acusados reconocieron haber abordado a la víctima con el propósito de robarle, desligándose ambos, eso sí, del apuñalamiento de que aquella fue objeto, el cual, recíprocamente, se atribuyen uno al otro, estos jueces consideran que dicha información resulta inidónea para tener por establecido el propósito apropiatorio tantas veces mencionado. En efecto, y conforme ha sido latamente examinado en el presente acápite, la prueba de cargo no permite extraer ningún elemento que, enlazado con los anteriores asertos, contribuya a tener por establecida una finalidad de esa naturaleza. De este modo, cualquier intento por tener por asentada esta última sobre la base, únicamente, de tal información autoincriminatoria, importaría un quebrantamiento de la prohibición contenida en el inciso final del artículo 340 del Código Procesal Penal, que impide condenar a un acusado con el solo mérito de su declaración.

Por último, y sin perjuicio de que, por lo demás, ambos acusados hicieron expresa reserva a su derecho a guardar silencio en la audiencia de juicio, tampoco puede considerarse, en el caso concreto, que la información contenida en las mentadas declaraciones, al concernir no sólo a hechos propios, sino que también a circunstancias fácticas eventualmente atribuibles al otro acusado, altera los razonamientos antes expresados. En lo tocante a esta cuestión, si bien las declaraciones prestadas por los coacusados en un mismo procedimiento, en general, constituyen información que ha corresponde ser debidamente aquilatada por los sentenciadores de fondo, la misma, en cualquier caso, ha de encontrarse debidamente corroborada por algún medio de prueba incorporado al debate y, lo que es más importante, exige al Tribunal proceder con extrema cautela al momento de valorar tales dichos. Ello por cuanto, por un lado, los imputados no declaran bajo juramento o promesa de decir verdad (artículos 93 y 98 del Código Procesal Penal), situación que deriva en que éstos no pueden ser sujetos activos del delito de falso testimonio en causa criminal, precisamente por carecer de toda obligación jurídica de veracidad en el juicio (artículo 206 del Código Penal). Por el otro, en razón de los beneficios procesales o de orden sustantivo que, eventualmente, puedan favorecer al coimputado que renuncia a su derecho a guardar silencio, ya sea en caso de que éste se

autoincrimine o inculpe a algún coacusado, constituyendo un ejemplo paradigmático de esta última situación la atenuante contemplada en el artículo 11 N° 9 del Código Penal. En el mismo sentido, la autora María Ines Horvitz ha recalcado los criterios de fiabilidad que la doctrina comparada ha establecido para apreciar los dichos de los coimputados en un mismo juicio, tales como “la personalidad del delator, las relaciones previas entre coimputado delator y acusado, el ánimo de autoexculpación y otros que podrían ser útiles al momento de efectuar su valoración” (Derecho Procesal Penal Chileno, T.II, 2004, p. 316).

Así las cosas, y teniendo presente las cautelas que en el parecer de la doctrina deben tenerse presente al momento de ponderar las declaraciones de los coimputados en un mismo proceso, y siendo el caso, además, que los dichos de éstos carecen, en el punto en controversia, de toda corroboración externa con la prueba de cargo, no resulta posible, en opinión de la sala, otorgarles mayor crédito.

DÉCIMO: Valoración de la prueba respecto al hecho n°2: Que conforme al criterio de este órgano adjudicador, la prueba de cargo fue suficiente, de acuerdo al baremo que prevé el artículo 340 del Código Procesal Penal, para tener por acreditado el núcleo fáctico de la imputación fiscal, en el modo que fuera consignado, en lo que concierne al suceso en cuestión, en el considerando octavo.

En tal sentido, cabe destacar que la defensa, durante su intervención de apertura no efectuó mayor cuestionamiento fáctico en torno al hecho N° 2, centrando sus argumentaciones más bien en la cuestión, de índole normativo, atingente al título de imputación que, en su concepto, correspondía atribuir a su representado, por estimar que las lesiones graves sufridas por uno de los afectados constituían un exceso de dolo de parte del coimputado que no formó parte del presente juicio -Jhonny Dudamel Dudamel- y que, por lo mismo, no resultaban comunicables a su mandante, el cual, por ende, sólo debía responder por la figura simple de robo con violencia o intimidación. Sin embargo, dicho interviniente letrado, en el marco de su alegato de clausura, solicitó, en lo principal, la absolución de Barazarte Madera, aseverando que la prueba de cargo era insuficiente para tener por probado el suceso ahora analizado, manteniendo eso sí, aunque ahora en carácter de subsidiaria, su petición dirigida a la recalificación del título de castigo, en los términos precedentemente anotados.

Pues bien, en el entender de esta sala, la suficiencia de la prueba de cargo se basa, respecto a la totalidad de los extremos fácticos integrantes del hecho N° 2, principalmente, en los relatos de las dos víctimas del hecho en comento, introducidos a estrados a través de las declaraciones de los funcionarios de la Policía de Investigaciones de Chile que tomaron conocimiento de los mismos, cuyos testimonios, además de ser concordantes entre sí, encontraron un debido sustento en medios de corroboración externa.

En cuanto a este último punto, es dable señalar, de una parte, que se contó con la evaluación pericial respecto a la naturaleza y tiempo de recuperabilidad de las lesiones sufridas por el ofendido David Fuenzalida Campos, las cuales, conforme a la opinión experta, eran plenamente compatibles con una agresión como la narrada por éste; de otra parte, cabe destacar que en la diligencia de entrada y registro practicada en las habitaciones asociadas a los dos acusados, y a la de del coimputado Dudamel Dudamel, se encontraron, en lo que para estos efectos importa, prendas de las características de aquellas vestidas por los hechores el día de ocurrencia del ilícito, las cuales se aprecian en los correspondientes registros de video, como asimismo, y lo que resulta más relevante, fue hallado, precisamente en la dependencia habitada por Barazarte Madera, el bolso sustraído a la víctima Fuenzalida Campos.

Lo anteriormente esbozado constituye, a modo de resumen, las consideraciones generales del Tribunal acerca de la prueba rendida en el juicio, atingente al hecho N° 2, todo lo cual será desarrollado a continuación.

1.- En cuanto a la dinámica de ocurrencia del hecho:

(i) En torno a este particular, cabe mencionar que se introdujeron a juicio los testimonios de ambos afectados, esto es, David Fuenzalida Campos y Javiera Guzmán Marín, cuyos dichos fueron incorporados a través de los funcionarios policiales que a continuación se señalarán. En tales relatos, los ofendidos, en síntesis, dieron cuenta de que en las circunstancias de tiempo y lugar indicadas en la acusación, y mientras realizaban un grafiti en un muro de la vía pública, observaron transitar a dos individuos, quienes luego de pasar por su lado, y al cabo de unos instantes, regresaron donde ellos, premunidos, cada uno, con cuchillos; uno de dichos individuos se abalanzó en contra de Javiera Guzmán, sustrayéndole un bolso, en tanto que el otro lo hizo respecto de David Fuenzalida, a quien,

además de apuñalar, le sustrajo, en ese contexto, un bolso y dinero en efectivo por la suma de ciento cincuenta mil pesos.

En tal sentido, en lo que respecta al relato de David Fuenzalida Campos, el Comisario Luis González Espinoza indicó, en síntesis, que el día 17 -de febrero de 2022- personal de su unidad -Brigada de Homicidios- solicitó su colaboración para tomarle declaración a una persona, pues tuvieron conocimiento respecto de un robo con violencia cometido el 16 febrero, el cual podía tener relación con el hecho investigado -el suceso N° 1-. Agregó, que a eso de las 20:00 horas del 17 -de febrero de 2022-, junto a otro colega, David Henríquez, fueron al Hospital San Juan de Dios, tomándole declaración a David Fuenzalida Campos, de veinticinco años, quien había ingresado a dicho centro, en horas de la madrugada, por una lesión con arma cortante en la cara posterior del tórax. Puntualizó, que el referido afectado narró que el 16 de febrero de 2022, a eso de las 1:20 de la madrugada, mientras circulaba junto a su polola por calle Catedral, comuna de Santiago, a la altura del N° 1762, lugar donde se encuentra un Registro Civil, se detuvieron para que esta última hiciera un grafiti, momento en el cual pasaron dos sujetos por su lado, los que describe como sospechosos, de entre veinte y veinticinco años de edad, tez morena y extranjeros. Adicionó, que uno de dichos sujetos, al pasar, los saludó y les dijo “todo bien”, para luego seguir avanzando; después de un minuto estas personas regresaron, trayendo ambos armas cortantes en sus manos. Preciso, que uno de los sujetos se abalanzó en contra de su pareja, en tanto que el otro lo hizo sobre él, ante lo cual atravesó la calle, recibiendo un golpe en la espalda, lo que provocó que cayera al suelo, sustrayéndole este último un bolso negro con gris, con vestimentas en su interior y útiles de aseo y su billetera con ciento cincuenta mil pesos. Añadió, que a su pareja le sustrajeron un bolso y que posteriormente - al hecho- los dos sujetos huyeron, terminando él con lesiones y siendo además internado en el Hospital San Juan de Dios.

En este mismo orden de ideas, el Inspector Patricio Barrios Toledo también dio cuenta de haber tomado una ampliación de la declaración policial del ofendido antes mencionado. Sobre este punto, el efectivo policial indicó haber tomado dicha ampliación respecto de David Fuenzalida, quien había sido víctima de un robo con violencia ocurrido el 16 de febrero de 2022, esto es, al día siguiente del homicidio -en contra de Darío Arévalo Galíndez- manifestando que dicho afectado, en síntesis, relató que mientras caminaba por

calle Catedral, cercano al Registro Civil, comuna de Santiago, fueron abordados por dos individuos masculinos de una edad aproximada de veinticinco años, vistiendo uno de ellos de negro completo y portando un cuchillo de, aproximadamente, veinticinco centímetros de largo, tipo carnicero. Agregó, que tal afectado manifestó que ambos sujetos portaban cuchillos, pero que él sólo recordaba cómo era el de aquél que vestía completamente de negro. Puntualizó el testigo policial que en esa misma instancia -ampliación de declaración-, la cual fue efectuada de forma posterior al ingreso efectuado -por personal de la Brigada de Homicidios- al domicilio donde residían los imputados, se le exhibió a dicha víctima una fotografía, reconociendo ésta como propio un bolso pequeño -que mostraba la mencionada imagen-, el cual tenía tres cierres y correspondía a que había sido sustraído producto del robo.

Ahora bien, en lo tocante al relato de Javiera Guzmán Marín, su introducción fue efectuada a través del Inspector Rodrigo Henríquez Iturra, quien indicó que paralelamente a las diligencias investigativas realizadas con motivo del hecho N° 1, el Subcomisario Poo tomó conocimiento de un suceso de características similares, ocurrido el 16 de febrero de 2022. En este sentido señaló que, de acuerdo a Javiera, el día del hecho -16 de febrero de 2022-, luego de compartir con sus amigos en un departamento céntrico, se fue con su pareja, rumbo a su casa, por calle Catedral, y que al cruzar la autopista se decidieron a hacer un grafiti en un muro existente en el lugar, específicamente en la calzada norte de calle Catedral. Agregó el testigo policial que, según dicha víctima, mientras hacían el grafiti pasaron por su costado dos sujetos transitando por Catedral, de oriente a poniente, los que les señalaron “todo bien”, y que luego continuaron caminando, sin prestarles mayor atención. Puntualizó que, conforme al relato de la afectada, ella y su pareja continuaron confeccionando el grafiti, pero que, sin embargo, se percataron de que los sujetos que habían pasado anteriormente volvieron, de poniente a oriente; en cuanto a la descripción que la víctima dio respecto de los individuos, indicó que el primero vestía una chaqueta de color azul con un gorro de lana blanco con pompón, en tanto que al otro lo describió con vestimentas completamente de negro. Adicionó que, según la víctima Javiera, el sujeto que vestía con chaqueta azul la atacó a ella, en tanto que aquél que estaba completamente de negro atacó a su pareja, intentando este último huir cruzando la calzada, sintiendo en esos momentos unos golpes por la espalda; a ella le sustrajeron un bolso tipo banano pequeño

que portaba, en tanto que a su pareja le sustrajeron un bolso que en el que tenía sus pertenencias. Indicó, asimismo, que la afectada en comentario expresó que producto de los gritos de auxilio, salieron vecinos del sector, ante lo cual los sujetos se dieron a la fuga del lugar, percatándose su pareja que tenía una herida cortopunzante torácica, desvaneciéndose en el lugar.

(ii) Los relatos de las víctimas, en lo tocante a la dinámica del suceso analizado, introducidos a juicio de la forma ya mencionada, además de ser concordantes entre sí, y no advirtiéndose que los mismos estuviesen influenciados por alguna motivación espuria, encontraron sustento en elementos que le dieron una debida corroboración externa.

En efecto, en primer término, se contó con registros visuales extraídos de las cámaras de seguridad del sector en que se perpetró el hecho, los cuales dan cuenta del desplazamiento, en forma previa y posterior a su comisión, de dos sujetos que vestían prendas de las mismas características que las referidas por los afectados.

En tal sentido, se incorporó un DVD contenedor de grabaciones ubicadas en calle Catedral N° 1793, levantado bajo cadena de custodia NUE 6198164, exhibido al Inspector Rodrigo Henríquez Iturra. Dicho deponente indicó que en el mismo se observaba a los dos sujetos, en la data ya indicada, caminando por Almirante Barroso, esquina calle Catedral, en dirección al oriente, vistiendo uno de ellos un gorro con pompón blanco, correspondiente al imputado Barazarte, en tanto que el otro, correspondiente al coimputado Dudamel Dudamel, lo hacía enteramente de negro. Asimismo, indicó que a las 1:38 horas, conforme al registro de las cámaras, aunque adelantado en diecinueve minutos, se veía la huida de dichos individuos y que salieron vecinos hacia el lugar donde se encontraban las víctimas.

Coincidentemente con los asertos del testigo policial antes mencionado, estos jueces, al observar el material visual antes señalado, logran apreciar -en la cámara 6-, que a las 1:35 horas -según registro de cámaras, que dos sujetos caminan juntos por calle Catedral, vereda norte, en dirección al poniente, quienes viran por Almirante Barroso, al norte, vistiendo uno de ellos un gorro blanco con pompón, pantalones cortos, una chaqueta con tonalidades azul en la parte inferior y celeste en la superior, y zapatillas claras, en tanto que el otro viste una parka negra, un pantalón claro y zapatillas de color rojo. Tal intervalo, según es dable inferir razonablemente, se corresponde con un momento precedente al

hecho, lo cual se deduce a partir del caminar sin prisa que mantienen ambos individuos, y que resulta plenamente coincidente con los relatos de los ofendidos, en orden a que, previo a la comisión del delito, los dos sujetos pasaron por su lado, por calle Catedral, de oriente a poniente. Seguidamente, a las 1:37 horas -según registro- los sujetos en cuestión retornan a calle Catedral, vereda norte, desde Almirante Barroso, y transitan hacia el oriente -por Catedral-, haciéndolo primero el sujeto que viste de negro y, segundos después, el de parka azul y gorro blanco con pompón, quienes luego se pierden de la visual de la cámara, constituyendo esto último, conforme es plausible concluir, los instantes inmediatamente previos al hecho, ello también en atención a su caminar pausado. Aproximadamente un minuto después, siendo las 1:38 horas -según registro de cámaras- los dos sujetos reaparecen nuevamente por calle Catedral, hacia el poniente, ahora eso sí corriendo, virando luego por Almirante Barroso, hacia el norte, a la vez que se observan distintas personas que, por el contexto, salieron en su persecución, todo lo cual resulta coincidente con la huida de los hechores, verificada en forma inmediatamente posterior a la perpetración del ilícito.

A mayor abundamiento, resultó clarificador para estos jueces el set fotográfico respecto del cual se incorporaron un total de treinta (30) imágenes correspondientes al análisis de las grabaciones ubicadas en calle Catedral N° 1793, confeccionado por la funcionario de la Policía de Investigaciones de Chile, Daniela González Fuentes, exhibido al Inspector Rodrigo Henríquez Iturra. En dicho set aprecia, de manera estática, los momentos previos y posteriores a la perpetración del suceso N° 2, como asimismo, las vestimentas utilizadas por los asaltantes, absolutamente coincidentes con las relatadas por ambas víctimas.

En este orden de ideas, y pese a que al material visual en cuestión no logra captar el momento mismo de ocurrencia del ilícito, el mismo igualmente permite afirmar la coherencia del relato de las víctimas con lo que se observa en dichos registros. Lo anterior, en primer término, en atención a las vestimentas de los sujetos que aparecen en tales grabaciones, compatibles con las referidas por éstas; en segundo lugar, en razón de que muestra que los individuos caminan por calle Catedral, en dirección al poniente, doblando por Almirante Barroso, y que al cabo de unos minutos éstos retornan a la primera de las calles mencionadas; y, en tercer lugar, puesto que en la huida de los asaltantes se observa,

de manera concordante con lo expuesto por los afectados, la persecución efectuada por los vecinos del sector.

De otra parte, es del caso relevar que otro elemento que otorga una debida corroboración externa al testimonio de los ofendidos dice relación con las lesiones sufridas por David Fuenzalida Campos, aspecto respecto del cual se introdujo la declaración pericial de Patricia Negretti Campos, médico forense del Servicio Médico Legal, cuyos asertos permiten afirmar la compatibilidad de las mismas con la agresión narrada por dicho afectado. Ello por cuanto la mencionada experta concluyó que las lesiones que afectaron a este último, localizadas en su zona paravertebral derecha y brazo izquierdo, eran explicables por la acción de un objeto cortopunzante, de pronóstico médico legal grave, las cuales sanaron, previo tratamiento quirúrgico, en un periodo de entre treinta y dos y treinta y cinco días, con igual tiempo de incapacidad, las que, a mayor abundamiento, habrían sido mortales en caso de no haber mediado los cuidados médicos oportunos y eficaces.

Según los asertos de la mencionada profesional, en síntesis, elaboró el informe médico legal de lesiones, en base a antecedentes, de David Leandro Fuenzalida Campos, para lo cual recibió, en un disco compacto, una fotocopia del dato de atención de urgencia del Hospital San Juan de Dios, de 16 de febrero de 2022, en que se consignaba que había sido agredido por terceros, en un asalto, hace menos de una hora, y que tenía heridas por arma blanca, en -la zona- paravertebral derecha y en el brazo izquierdo. Agregó, que se le instaló una pleurostomía izquierda en el servicio de urgencia y se le indicó su hospitalización. Puntualizó que, adicionalmente, se adjuntaba una fotocopia de la ficha clínica N° 2954829, del Hospital San Juan de Dios, correspondiente al periodo comprendido entre el 16 febrero 2022 y el 21 de febrero de 2022, en la que se consignaba una herida por arma blanca en el dorso, en la región subescapular derecha, señalándose que tenía sangre y aire en la cavidad pleural izquierda, y que este hemo neumotórax era traumático, es decir, secundario a la herida antes descrita, el cual había sido drenado, o sea vaciado, a través de la pleurostomía. Adicionó que de acuerdo a la ficha clínica, la víctima presentaba una atelectasia, es decir, el pulmón estaba comprimido, al estar ocupado por sangre en el lóbulo inferior izquierdo; además, se consignaba que el alta hospitalaria se produjo el 21 de febrero de 2022. En cuanto a sus conclusiones, la perito indicó que las lesiones eran explicables por un objeto cortopunzante, de pronóstico médico legal grave,

que sanaron, previo tratamiento quirúrgico, entre treinta y dos y treinta y cinco días, con igual tiempo de incapacidad, compatibles con el relato escrito del lesionado. Preciso, además, que las lesiones habrían sido mortales de no haber mediado socorros médicos oportunos y eficaces.

De forma armónica con el relato experto antes mencionado, fue incorporado el dato de atención de urgencia N° E0005150011, del Hospital San Juan de Dios, de fecha 16 de febrero del 2022, relativo a David Leandro Fuenzalida Campos, en el que se consigna del socorro médico prestado a dicho ofendido el mismo día del suceso en cuestión, de forma coincidente con la exposición efectuada por la doctora Negretti Castro. Asimismo, también fue introducida la ficha clínica N° 2954829, de David Fuenzalida Campos, emitida por el Hospital San Juan de Dios, remitida mediante el Oficio N° 749/2022, de fecha 25 de agosto del 2022, y en la que se indican los procedimientos médicos y quirúrgicos a que dicho paciente fue sometido y su evolución, todo ello de un modo plenamente concordante con el expresado por la perito precedentemente señalada.

(iii) En lo referente al concierto previo con que actuaron los sujetos que perpetraron el hecho analizado, el mismo fluye del relato de los ofendidos y el material visual incorporado, probanzas que ya han sido objeto de valoración en el presente acápite.

En efecto, la información extraíble de tales medios probatorios permite concluir suficientemente que existía un acuerdo previo entre los asaltantes, correspondientes, como se indicará, al acusado Barazarte y al coimputado Dudamel, dirigido a intimidar a las víctimas con armas blancas, con el objeto de sustraerle sus pertenencias y, en caso de ser necesario, utilizar dichos elementos cortopunzantes para vencer cualquier resistencia de que pudiesen oponer esta últimas o terceros en su auxilio.

Tal conclusión se estima debidamente afianzada sobre la base de una multiplicidad de indicios, cuya gravedad, precisión y concordancia impiden, de manera plausible, arribar a una inferencia diversa. Lo anterior, en primer término, pues en forma previa al evento ambos hechores transitan juntos por calle Catedral, en dirección al poniente, notando éstos la presencia de los afectados, al punto que uno de ellos les formula una expresión verbal - “todo bien”-, para luego virar por Almirante Barroso y, posteriormente, devolverse, al cabo de unos breves minutos, abalanzándose sobre aquéllos, utilizando, cada asaltante, un cuchillo. En segundo término, ambos individuos perpetrar conjuntamente el delito,

acometiendo uno de ellos -aquél que vestía de negro y llevaba un gorro blanco con pompón-a la víctima Javiera Guzmán -, en tanto que el otro -que vestía de chaqueta azul y celeste- a David Fuenzalida. En tercer término, luego de perpetrado el ilícito, ambos sujetos huyen en forma conjunta. Y, por último, en lo referente a la extensión del concierto, esto es, si el mismo abarcaba o no la utilización, por parte del otro hechor, de las armas blancas, ello resulta suficientemente establecido en atención a que, conforme lo relataron ambos agraviados, los dos individuos portaban cuchillos al momento de acometerlos, de modo que es dable concluir que ambos, en razón de tal circunstancia, a lo menos aceptaban en su voluntad la eventual utilización, por parte del otro, de dicho elemento, en caso de resistencia u oposición de las víctimas, o de terceros que pudiesen concurrir en su auxilio.

2.- En cuanto a la circunstancia de haber sido el acusado Barazarte Madera quien, en conjunto con un coimputado que no fue parte del presente juicio, y previamente concertado con este último, perpetró el suceso N° 2:

(i) En cuanto a la vinculación del acusado Barazarte Madera con el hecho N° 2 de la imputación, la misma es dable tenerla por establecida, de una parte, en atención al hallazgo, con motivo de la ejecución de la diligencia de entrada y registro descrita en el considerando anterior, y precisamente en la habitación asociada a dicho encartado, del bolso tipo banano sustraído a la víctima Fuenzalida Campos, lo cual, en el parecer de estos magistrados, se erige en un contundente elemento de corroboración externa respecto de su participación en el referido evento.

En tal sentido, y conforme se dio cuenta al momento de valorar la prueba con respecto al hecho N° 1, paralelamente a la realización de las diligencias investigativas orientadas a su averiguación, se tomó conocimiento de otro suceso, ocurrido el 16 de febrero de 2022, que compartía algunas similitudes con el primero de los eventos señalados. Sobre este tópico, el Inspector Rodrigo Henríquez Iturra aseveró que advirtió elementos similares en ambos hechos, como lo era el característico gorro blanco con pompón utilizado por uno de los hechores, así como también su modus operandi, la cercanía entre ellos, y sus bloques horarios. En este orden de ideas, y según se examinó en el considerando precedente, luego de efectuarse un control migratorio en el inmueble ubicado en calle Maturana 781, comuna de Santiago, se solicitó y luego se ejecutó, con fecha 21 de febrero de 2022, una autorización judicial de entrada y registro en las

dependencias del domicilio, correspondiente a un cité habitado por, aproximadamente, quince personas extranjeras.

Pues bien, dentro de los hallazgos relevantes encontrados con ocasión del diligenciamiento de la autorización judicial en cuestión, y según lo afirmó el Inspector Henríquez Iturra, se incautó, precisamente en la habitación asociada a Ricky Barazarte Madera, un bolso negro, el cual fue reconocido por la víctima Fuenzalida como de su propiedad. Lo anterior fue confirmado por el Inspector Patricio Barrios Toledo, quien manifestó haber concurrido a tomar una ampliación de declaración a David Fuenzalida, oportunidad en la cual le exhibió una fotografía, reconociendo aquél como propio un bolso pequeño que aparecía en la imagen, el cual tenía tres cierres y que, según sus dichos, le habían sido sustraído producto del robo. El bolso negro en cuestión, con tres compartimentos, fue incorporado, además, en carácter de prueba material, NUE 6198132, exhibida a los dos testigos policiales últimamente aludidos. Tal hallazgo, en el parecer de estos jueces, constituye un elemento que, de forma relevante, otorga sustento al hecho de que el acusado Barazarte Madera fue uno de los dos sujetos que perpetró el hecho N° 2, pues a escasos días de su ocurrencia fue sorprendido, manteniendo bajo su posesión, precisamente una de las especies sustraídas a uno de los ofendidos.

De otra parte, la ligazón del encausado Barazarte Madera con el hecho N°2 encuentra sustento en otros hallazgos relevantes, también recopilados con ocasión de la ejecución de la ya mencionada diligencia de entrada y registro, como lo son, entre otras vestimentas, una parka azul y un gorro blanco con pompón, las cuales, según se aprecia en el material visual atinente al suceso examinado, ya analizado en este mismo acápite, precisamente lleva el individuo que, de acuerdo al personal policial que revisó dichos registros, corresponde al señalado encartado. Ello, máxime, si las características de la última prenda mencionada, además, guardan plena concordancia con aquella usada por Barazarte Madera en la comisión del evento N°1.

En efecto, el Inspector Henríquez Iturra afirmó que en el marco del diligenciamiento de la autorización judicial de entrada y registro tantas veces referida, fue levantada, desde la habitación -N° 1-, asociada al imputado Barazarte Madera, un short de tonalidad clara, el cual reunía las características de aquel que utilizaba dicho imputado al momento de la comisión del delito de robo con violencia en contra de David Fuenzalida, lo cual

efectivamente se visualiza en las grabaciones extraídas desde las cámaras de calle Catedral, correspondientes a la evidencia material NUE 6372964, exhibida al aludido funcionario policial.

De igual manera, también se incautó en dicho inmueble, específicamente en la dependencia correspondiente a Dudamel Dudamel, según se razonó en el considerando anterior, el característico gorro blanco con pompón utilizado, en ambos hechos, por parte de uno de los sujetos que los perpetraron, correspondiente a aquel que se abalanzó, en el suceso N°2, en contra de la afectada Javiera Guzmán.

Adicionalmente, y según lo expresó el Inspector Henríquez Iturra, también se incautó, desde la habitación asociada al acusado Armando González León, la característica parka de color azul y celeste que, según se aprecia en el registro visual ya mencionado, y como también lo refirieron las víctimas, vestía uno de los hechores, específicamente aquél que acometió a Javiera Guzmán. La citada prenda, además, fue incorporada como prueba material NUE 4673110, exhibida al mentado testigo policial.

Asimismo, también fue levantada, desde la habitación asociada al coimputado Dudamel Dudamel, conforme fuera afirmado por el Inspector Henríquez Iturra, un par de zapatillas rojas con negro, marca Nike, las cuales, además, fueron incorporadas en carácter de evidencia material, NUE 6372965, exhibida al mencionado deponente. Si bien la utilización de dicho calzado aparece atribuida a un imputado que no formó parte del presente juicio, y respecto del cual, según se indicó por parte de la Fiscalía, tenía la calidad de condenado en esta causa, lo cierto es que su hallazgo, en conjunción con el resto de evidencias recolectadas desde las habitaciones del cité y demás probanzas introducidas a estrados, refuerzan la idea de un actuar mancomunado entre éste y el acusado Barazarte Madera.

En el mismo orden de ideas, en cuanto a las evidencias recogidas desde el domicilio de calle Maturana N° 781, con motivo de la autorización judicial de entrada y registro ejecutada con fecha 21 de febrero de 2022, y específicamente en lo referente al hecho ahora analizado, resultó ilustrativa la introducción de los sets fotográficos que a continuación se señalarán. En primer término, aquel respecto del cual fueron incorporadas treinta y tres (33) fotografías, correspondientes a la habitación N°1-asociada a Barazarte Madera-, exhibido al Inspector Henríquez Iturra, particularmente las imágenes 20 y 21, en las que se aprecia el

bolso negro con tres cierres, consistente en la especie sustraída a la víctima David Fuenzalida Campos. En segundo término, el set respecto del cual se introdujeron treinta y cuatro (34) fotografías, correspondientes a la habitación N°2, exhibido a los Inspectores Henríquez Iturra y Becerra Becerra, particularmente las imágenes 20 y 21, en las que se aprecia la característica parka color azul y celeste, utilizada por uno de los asaltantes del hecho en cuestión. Y, en tercer término, el set fotográfico respecto del cual se introdujeron dieciséis (16) imágenes correspondientes a la habitación N°3 -asociada al coimputado Dudamel Dudamel- exhibido a los Inspectores Henríquez Iturra y López Leal, particularmente las imágenes 14 y 15, en que se observan las zapatillas rojas marca Nike, calzado que se asemeja cabalmente al utilizado por uno de los hechores del suceso N°2.

Finalmente, y permitiendo a estos jueces imponerse acerca de las evidencias recopiladas desde el interior del tantas veces citado inmueble ubicado en calle Maturana N° 781, se introdujo un set de ciento cinco (105) imágenes anexas al informe pericial fotográfico N° 414-022, exhibido a la perito fotógrafa Mónica Novoa González. Dentro de dichas imágenes, y en lo que resulta relevante para el presente examen, cabe destacar aquellas en que se aprecia el bolso negro de tres cierres, sustraído a la víctima David Fuenzalida (imágenes 14 y 15); asimismo, las que exhiben la parka color azul y celeste utilizada por uno de los asaltantes (imágenes 58 y 59); y por último, las zapatillas rojas marca Nike que calzaba el otro hechor (imágenes 85, 86 y 87).

(ii) Sin perjuicio de que la prueba de cargo, conforme a lo razonado en el presente acápite, resultó autobastante para la acreditación de los distintos extremos fácticos atinentes al hecho N° 2, es menester hacer notar, por constituir información introducida al presente juicio, que las declaraciones prestadas, durante la fase investigativa, por el acusado Barazarte Madera y el coimputado Dudamel Dudamel resultan coincidentes con las conclusiones a las que, en lo pertinente, arribaron estos sentenciadores. En este sentido, si bien no puede soslayarse la circunstancia de que la misma debe aquilatarse con extrema cautela, toda vez que, según se indicó a propósito del hecho N° 1, tales asertos hallaron su fuente en declaraciones que pese a no adolecer de ningún vicio de ilegalidad, al haber sido prestadas en presencia de un fiscal y previa lectura de sus derechos, fueron entregadas sin la presencia de abogado defensor, a lo cual se suma que dichos encausados, durante el juicio, hicieron expresa reserva a su derecho a guardar silencio.

Con todo, de lo que se trata en este lugar es solamente hacer notar la armonía existente entre tales declaraciones y la prueba de cargo rendida a propósito del suceso N° 2, muy particularmente en lo referente a la participación de dichos imputados, específicamente en cuanto a las prendas que éstos vistieron, las armas que portaron -y utilizó uno de ellos- y las actuaciones que específicamente fueron desplegadas.

Señalado lo anterior, conviene remarcar que tales declaraciones, según ya se indicó en el considerando precedente, fueron prestadas el día 21 de febrero de 2022, en dependencias de la Brigada de Homicidios Metropolitana, ante un fiscal del Ministerio Público y en presencia, además, del Subcomisario Roberto Poo. En tal sentido, y circunscrito al hecho N° 2, este último testigo policial indicó que Ricky Barazarte Madera refirió que tal suceso se cometió en la misma semana -a la del hecho N° 1-, en la noche, a eso de las 2:00 de la mañana, oportunidad en la cual salió con su primo Jhonny Dudamel, quien vivía en el mencionado domicilio -Maturana 781-, acompañándolo a ver a la pareja que tenía en ese entonces, de nombre Margarita, venezolana, la que al parecer ejercía el comercio sexual en calle San Pablo. Agregó que de regreso al domicilio, en una calle que bajaba, advirtieron que había una pareja que hacía rayados en una muralla, pasando por un costado de ésta y que metros más adelante decidieron regresar, con el objeto de robarles. Puntualizó, que Ricky precisó que fue él quien abordó a la mujer, intimidándola con un cuchillo y sustrayéndole un bolso, en tanto que su primo abordó al hombre, también con un cuchillo, e igualmente le sustrajo especies; dado lo anterior salieron vecinos, por lo que se fueron corriendo, dirigiéndose hacia su domicilio. Indicó, asimismo, el Subcomisario Poo, que Ricky Barazarte señaló no recordar cómo andaba vestido ese día.

Por su parte, y en lo concerniente a Jhonny Dudamel, el Subcomisario Poo Astudillo indicó que éste, también de nacionalidad venezolana, declaró que desde de enero de 2022 residía en Maturana 781, donde también lo hacían dos primos, siendo uno de ellos Ricky Barazarte Madera. Agregó, que respecto al hecho en que se le atribuía participación -únicamente el N° 2-, que un día, como a la 1:00 de la mañana, salió con su primo Ricky a deambular por las cercanías de su domicilio, buscando personas para robarles y que, mientras caminaban por una calle, observaron que una pareja hacía grafitis en un muro. Puntualizó, que dicho imputado aseveró que para concretar su propósito ambos portaban cuchillos, pasando primero por el costado -de la pareja-, para luego regresar y abordarlos;

su primo abordó a la mujer, en tanto que él al hombre; él -Dudamel Dudamel- agredió al hombre, asestándole heridas con un arma cortopunzante, tanto en la espalda, por el lado derecho, como en el brazo, por el costado derecho, sustrayéndole además un bolso negro. Adicionó, que después corrieron por las inmediaciones hasta llegar a su domicilio, deshaciéndose su primo de las especies de la mujer, las cuales consistían en un bolso con pinturas; él -Dudamel Dudamel- llegó al domicilio con las especies, advirtiéndole que en el bolso -que sustrajo al ofendido varón- había marihuana tipo “cripy” y dosis de pasta base de cocaína. Precisó, que en la jornada de ocurrencia del delito vestía chaqueta térmica negra, pantalón de buzo gris, y unas zapatillas Nike rojas con negro, en tanto que Ricky un gorro de lana blanco invierno o crema, el cual le pertenecía a él -a Dudamel Dudamel- una chaqueta azul marino con celeste y zapatillas claras.

(iii) Para finalizar este análisis, la sala estima necesario recalcar que en nada contribuyó a alcanzar las conclusiones vertidas precedentemente la coincidencia existente, desde el punto de vista científico, entre la sangre de la víctima David Fuenzalida Campos y aquella hallada en las prendas consistentes en un pantalón H&M y una chaqueta All Navy. Con relación a dicha correspondencia, el perito bioquímico Cristian Santander Sepúlveda, indicó que existía una probabilidad sobre 6.000 billones de veces más probable que la sangre humana hallada en la muestra “MPR pantalón H&M” y “MPR chaqueta All Navy” proviniesen de David Fuenzalida Campos a que no proviniesen de él, es decir, respecto a cualquier otro individuo al azar de la población.

En efecto, en lo concerniente a este aspecto del dictamen pericial en comento, y a diferencia de lo razonado a propósito del análisis de las demás evidencias de interés criminalístico, lo cierto es que los elementos de convicción incorporados a estrados no permiten ligar la coincidencia del material genético precedentemente apuntado con algún elemento asociado al acusado Barazarte o al coimputado Dudamel. Lo anterior, pues ninguna probanza dio cuenta de que las prendas precedentemente mencionadas hayan sido levantadas desde el domicilio de alguno de los imputados de la presente causa. Ello, máxime, si dentro de la evidencia material ofrecida en el auto de apertura de juicio oral -mas no incorporada en estrados- se incluía, en el N° 51, “Un (01) pantalón marca H&M entregado por la víctima David Fuenzalida Campos y levantado bajo cadena de custodia NUE 6198210”, por lo que no resulta implausible inferir que dichas vestimentas hayan sido

entregadas, tal como explícitamente se menciona en la resolución en comento, precisamente por dicho afectado al personal policial y que, por ende, carezcan de toda vinculación con las recolectadas desde el inmueble ubicado en calle Maturana 781, comuna de Santiago.

3.- Desestimación de la pretensión absolutoria de la defensa:

Tal como fuera anticipado, la defensa del encartado Barazarte Madera abogó, en su alegato de clausura, en lo tocante al suceso N°2, por la absolución de su representado, indicando que la prueba de cargo resultaba insuficiente conforme al estándar legal de condena. Más concretamente, argumentó que debía tenerse especialmente presente la incomparecencia de ambos afectados a estrados, cuyos dichos únicamente fueron introducidos por los funcionarios policiales que, de oídas, recogieron sus relatos, a lo cual se sumaba el hecho de que las grabaciones obtenidas desde los registros de cámaras no lograban dar cuenta del ilícito.

El Tribunal disiente de dicha alegación absolutoria.

En efecto, y conforme fue razonado latamente en este mismo considerando, estos jueces explicitaron las razones en virtud de las cuales alcanzaron la conclusión, más allá de toda duda razonable, tanto respecto de la ocurrencia del hecho N°2 materia de la imputación, como la vinculación en el mismo del acusado Barazarte Madera. En tal sentido, no obstante ser efectivo que los ofendidos no comparecieron personalmente a estrados, así como también, que no se contó con algún material visual que permitiese apreciar el instante mismo de comisión de dicho evento, tal circunstancia en la especie, en coherencia con el principio de libertad de prueba que rige en materia procesal penal, no muta de modo alguno las consideraciones que se tuvieron en vista para dar por establecido el sustrato fáctico de la imputación.

Ello por cuanto, según se explicó en su lugar, los dichos de los agraviados, incorporados a través de testigos policiales que tomaron conocimiento de ellos, encontraron sustento en diversos medios de prueba rendidos durante el juicio. Dentro de éstos, el hallazgo, en la habitación asociada a Barazarte Madera, precisamente de una de las especies sustraídas, como asimismo, la incautación, en el tantas veces mencionado inmueble de Maturana 781, de prendas de las mismas características a las que, acorde a las grabaciones examinadas, usaban los hechores; dentro de ellas, el característico gorro de lana blanco con

pompón, y la parka de color azul y celeste. Todo ello, además, sin perjuicio del material de video obtenido desde las cámaras de seguridad levantadas desde calle Catedral 793, relativo a los instantes anteriores y posteriores al suceso, plenamente concordante con lo relatado por las víctimas. Por lo demás, en este último material incluso se aprecia, como dato periférico, el transitar de los asaltantes, previo al ilícito, por calle Catedral, en dirección al poniente y su posterior regreso, al cabo de unos minutos, a la misma arteria, ahora en dirección al oriente, lo que guarda total coincidencia con los asertos de los afectados.

Finalmente, es dable indicar que la alegación de la defensa, encaminada a la recalificación del título de castigo que correspondería atribuir a Barazarte Madera, la misma será examinada en el acápite siguiente, por concernir a un aspecto más bien de índole normativo.

UNDÉCIMO: Calificación jurídica, grado de desarrollo e intervención de los acusados en los ilícitos. Que a juicio de estos sentenciadores, los sucesos que se dieron por establecidos en el considerando décimo de este fallo son constitutivos de los ilícitos que seguidamente se indican:

1.- En cuanto al hecho N° 1:

(i) El suceso en cuestión, descrito, en lo pertinente, en el considerando octavo, es constitutivo de un delito de homicidio simple, previsto y sancionado en el artículo 391 N° 2 del Código Penal.

En torno a la faz objetiva del tipo, la conducta ha de consistir en una acción u omisión idónea para ocasionar la muerte de otra persona; por su parte, en lo concerniente a su resultado, éste, además de ser objetivamente imputable a la acción u omisión antes señalada, ha de implicar el fallecimiento del sujeto pasivo.

En cuanto a su faz subjetiva, el ilícito exige que el sujeto activo actúe con dolo, ya sea directo o eventual.

Adicionalmente, cabe tener presente, además, que el tipo examinado constituye la figura básica o residual del homicidio- entendido éste en términos amplios-, esto es, su aplicación está supeditada a que, tal como en el caso ahora analizado, los hechos no puedan subsumirse en el delito de parricidio, femicidio, homicidio calificado o infanticidio.

En este contexto, en el caso *sub-judice* se satisfacen íntegramente los elementos típicos ya reseñados. En efecto, de una parte, se ejecutó por parte de los dos agentes- en

este caso los acusados Barazarte Madera y González León- una conducta con aptitud bastante para provocar la muerte de otra persona, en este caso, apuñalar, con elementos cortopunzantes, a la víctima Darío Arévalo Galíndez en distintas partes de su cuerpo, incluyendo, entre ellas, la zona torácica anterior y posterior. Por otra parte, la acción anteriormente descrita provocó la muerte del afectado, ello a consecuencia de la agresión propinada a nivel del tórax anterior, a la altura de la tetilla izquierda, la cual, conforme se razonó en su lugar, lesionó uno de sus pulmones, desencadenando la producción de un hemotórax.

Asimismo y en lo que dice relación con la faz subjetiva del tipo penal, estos jueces entienden que ambos sujetos activos actuaron con dolo directo, teniendo presente para ello no sólo la naturaleza de los elementos empleados para la agresión, como lo son las armas cortopunzantes, dada su aptitud para dañar severamente la integridad física, sino que además, y en atención a las zonas corporales lesionadas con dichos objetos, particularmente aquella en la que recayó la de carácter mortal, esto último por cuanto, como es sabido, allí se localizan órganos vitales para el funcionamiento de la vida humana, tales como pulmones y corazón.

(ii) El delito de homicidio simple que se estimó configurado en la especie, se encuentra, en opinión de la sala, en carácter de consumado, al haberse ejecutado en forma completa el hecho punible, esto es, tanto la acción como el resultado típico.

(iii) En lo concerniente a la intervención de los acusados, la misma, en el parecer de estos sentenciadores, ha de ser calificada de coautoría, conforme al artículo 15 N° 1, parte primera, del Código Punitivo, al haber tomado parte en su ejecución de una manera inmediata y directa. Lo anterior, puesto que, conforme se consignó en la motivación octava, fueron precisamente dichos encartados quienes hirieron al ofendido con elementos cortopunzantes, ocasionándole, a consecuencia de dicho accionar, su fallecimiento.

(iv) Finalmente, y tal cual se señaló en el veredicto de rigor, estos jueces desestiman la calificación jurídica propuesta por la Fiscalía en su acusación respecto del hecho N° 1, esto es, la de robo con homicidio, tipificado en el artículo 433 N° 1 del Código Punitivo, acogiendo, eso sí, de acuerdo a lo ya desarrollado, la de homicidio simple.

En efecto, y según lo razonado en el considerando noveno, los elementos de cargo resultaron inidóneos, para tener por acreditado, conforme al umbral de certeza que exige el

artículo 340 del Código Procesal Penal, que el actuar de los encausados estuviese enderezado a la sustracción de especies del ofendido, falencia probatoria que, como no puede ser de otra manera, impide concluir que el homicidio en cuestión hubiese sido cometido con motivo u ocasión de un robo.

2.- En cuanto al hecho N° 2:

(i) En lo atinente a dicho suceso, atribuido en la acusación exclusivamente al encartado Barazarte Madera, este órgano adjudicador considera que calza en la figura de robo con violencia calificado, tipificada, en carácter de delito complejo, en el artículo 433 N° 3 del Código Penal.

Dado el carácter calificado de dicho ilícito, su faz objetiva comparte varias de las exigencias requeridas para la configuración de la figura simple de robo con violencia o intimidación, previsto en el artículo 436 inciso primero, en relación con los artículos 432 y 439, todos del citado texto legal, sin perjuicio de las de carácter específico que, adicionalmente, han de concurrir.

En tal sentido, en primer término, es preciso que los agentes, contra la voluntad de su dueño, y con ánimo de lucro, ejerzan violencia en contra del sujeto pasivo, ello con la finalidad de apropiarse de cosas muebles ajenas. Sobre el particular, el ya mencionado artículo 439 prescribe, en lo pertinente, que: *“Para los efectos del presente párrafo se estimarán por violencia o intimidación en las personas los malos tratamientos de obra, las amenazas ya para hacer que se entreguen o manifiesten las cosas, ya para impedir la resistencia u oposición a que se quiten, o cualquier otro acto que pueda intimidar o forzar a la manifestación o entrega”*.

A su turno, en cuanto a los distintos momentos en que puede tener lugar la violencia, de acuerdo a lo prescrito en el inciso primero del artículo 433 del Código Penal, la misma ha de verificarse antes del robo, para facilitar su ejecución, en el acto de cometerlo, o bien después de cometido, para favorecer su impunidad.

Pues bien, consideran estos jueces que se ejerció, por parte de los sujetos activos, al momento de perpetrar el acto apropiatorio, violencia e intimidación dirigida funcionalmente a la sustracción de especies de los ofendidos. En efecto, ambos agentes, previamente concertados, acometieron a las víctimas, exhibiéndoles sendas armas blancas, procediendo uno de ellos -Barazarte Madera-, a sustraer una cartera o bolso perteneciente a

la víctima Javiera Guzmán Marín, en tanto que el otro- Jhonny Dudamel Dudamel- acometió al afectado David Fuenzalida Campos, propinándole, con un elemento de las características ya mencionadas, sendas puñaladas, apropiándose, en ese contexto, de un bolso negro y dinero en efectivo por la suma de ciento cincuenta mil pesos.

Adicionalmente, y en atención a que la violencia ejercida en contra de uno de los ofendidos, específicamente David Fuenzalida Campos, consistente en haberlo herido en la forma precedentemente descrita, produjo en éste lesiones que, conforme a lo razonado en el considerando décimo, tardaron en sanar más de treinta días, se verifican en el caso *sub-judice* los presupuestos que prevé el artículo 397 N° 2 del Código Penal, los cuales, precisamente, conllevan a la agravación del robo con violencia, verificándose con ello el desplazamiento de la figura básica a aquella descrita en el numeral 3° del citado artículo 433.

De otra parte, y despejado lo anterior, cabe tener en consideración que la apropiación recayó sobre objetos materiales de las características exigidas por el legislador, esto es, cosas muebles ajenas, toda vez que el accionar desplegado por los agentes se dirigió a la apropiación del dinero en efectivo y de las especies ya mencionadas.

En torno a la faz subjetiva del tipo penal, es dable concluir que los autores obraron con dolo directo, esto es, que su objetivo era precisamente la realización del hecho delictivo. En efecto, la propia modalidad comisiva empleada, a saber, la violencia e intimidación, tanto a través de la exhibición de cuchillos, como su utilización en contra de uno de los afectados, para vencer su resistencia, seguida de la sustracción de sus cosas muebles ajenas, es reveladora por sí sola de tal circunstancia. Asimismo, el ánimo apropiatorio resulta claro si se tiene en cuenta que los sujetos activos huyeron del lugar de los hechos con los bienes sustraídos. Finalmente, y en cuanto al ánimo de lucro, éste se configura en atención a la propia naturaleza de las cosas muebles sustraídas, particularmente el dinero efectivo, por constituir este último un medio universalmente empleado para el intercambio de bienes y servicios.

(ii) En lo concerniente a su grado de desarrollo, el ilícito de robo calificado se encuentra consumado, al haber sido ejecutado el hecho típico y antijurídico de forma completa, esto es, tanto la apropiación de cosas muebles ajenas, como el ejercicio de

violencia, en los términos ya descritos, y dirigida funcionalmente a propiciar dicho ánimo apropiatorio.

(iii) Finalmente, en lo atinente a la intervención que corresponde atribuir al acusado Barazarte Madera en el delito de robo con violencia calificado, la misma ha de ser calificada de coautoría, conforme a lo preceptuado en el artículo 15 N° 1 del Código Penal, al haber tomado parte en su ejecución, conjuntamente con un coimputado que no formó parte del presente juicio, individualizado como Jhonny Dudamel Dudamel, de una manera inmediata y directa.

Sobre este punto, cabe mencionar, de entrada, que tal como lo recalca Héctor Hernández, existe consenso doctrinal en torno a los requisitos que han de concurrir para que pueda afirmarse una coautoría, a saber, tanto un acuerdo de voluntades, como un aporte funcional al hecho común (“Artículo 15”, en Código Penal Comentado, Parte General, Doctrina y Jurisprudencia, Couso/Hernández [dirs.], 2011, p. 399). De esta forma, siendo la coautoría una de las formas en que puede desplegarse la noción de “autor”, resulta obligado concluir que el coautor constituye un sujeto que también ha de ocupar el rol de personaje central en el acontecer típico, cuya centralidad, en los denominados “delitos de dominio”, como lo es precisamente aquel que concurre respecto al hecho N°2, conlleva a la necesidad de exigirle que posea un co-dominio del hecho (Así, paradigmáticamente, Claus Roxin, *Autoría y Dominio del Hecho en Derecho Penal*, 7ª ed, 2000, *passim*).

En este orden de ideas, merece destacarse que resulta pacífico sostener que quienes con su comportamiento realizan directamente elementos integrantes de la descripción típica han de ser considerados coautores, situación que nuestro Derecho reconoce en el artículo 15 N° 1 del Código Penal, al considerar como tales a quienes “toman parte de la ejecución del hecho de una manera inmediata y directa”.

Por lo anterior, estos sentenciadores estiman que no existe mayor inconveniente en concluir que el imputado Barazarte Madera intervino en el ilícito en la calidad ya indicada. En efecto, por un lado, y pese a que el precepto legal precedentemente citado no exige, en su literalidad, un concierto previo, por lo que bastaría un acuerdo o voluntad común propio de toda coautoría, su existencia, según ya se indicó, igualmente cabe ser afirmada en la especie. Dicha exigencia ha sido entendida como compuesta de dos elementos, a saber, “un acuerdo de voluntades referido a la comisión de un delito y un plan que exija la

intervención de cada uno de los concertados” (Jaime Winter Etcheberry, “Esquema general de la diferenciación coautoría y complicidad en el Código Penal chileno”, en Participación Penal: Dificultades de delimitación entre formas de autoría y participación, Doctrina y Jurisprudencia Penal, N° 17, 2014, p. 54). En efecto, y conforme se razonó en la motivación décima, tal concierto previo fluye del hecho de que ambos sujetos activos circulaban juntos por la vía pública, y que luego de haber pasado por el lugar en el que se encontraban las víctimas, al cabo de unos instantes, retornan donde se hallan estas últimas, para así acometerlas en la forma ya referida, luego de lo cual los dos hechores huyen, también de manera conjunta.

De otro lado, y en un plano material, Barazarte Madera es el sujeto activo que intimida, con un arma blanca, a la ofendida Javiera Guzmán Marín, apropiándose de su cartera, esto es, despliega actos que individualmente considerados calzan, al menos en parte, en el tipo que se estimó concurrente en la especie.

Así las cosas, y conforme fuera indicado en el basamento precedente, se desestima la petición absolutoria planteada, de forma principal, por la defensa de Barazarte Madera, pues la misma se basó en la presunta insuficiencia de la prueba de cargo, cuestionamiento que, en concepto del Tribunal, y conforme se razonó latamente en la motivación anterior, carece de asidero.

De igual manera, se rechaza la pretensión subsidiaria de la defensa del aludido encausado, encaminada a obtener la recalificación del título de imputación a la figura simple de robo con violencia o intimidación. Lo anterior, pues conforme a lo ya analizado, la circunstancia de haber acometido ambos sujetos, entre ellos Barazarte Madera, a las víctimas de manera conjunta, y portando cada uno de éstos sendas armas blancas, permite afirmar la existencia de un plan delictivo común que abarcaba, en caso de ser necesario, y tal como aconteció respecto del afectado Fuenzalida Campos, la utilización de dichos elementos, todo ello a objeto de vencer su eventual resistencia.

En este sentido, el conocimiento recíproco respecto del porte de los mentados cuchillos permite afirmar que cada uno de los agentes tenía, a lo menos, dolo eventual respecto de su utilización, al haber, como mínimo, aceptado en su voluntad tal alternativa lesiva. De este modo, la mera circunstancia de que la agresión que ocasionó en el mencionado afectado las lesiones ya descritas no fuese propinada, materialmente, por

Barazarte Madera, de manera alguna permite concluir que existió, de parte de Dudamel Dudamel, un exceso de dolo, sino que, muy por el contrario, y precisamente por formar parte del plan delictual común, las mismas resultan plenamente imputables al actuar del mencionado acusado.

Por lo anterior, se descarta el planteamiento de la defensa, atingente a la mentada petición subsidiaria, en orden a que el mero uso de un cuchillo, por parte de uno de los sujetos activos concertados para la ejecución de un robo con intimidación, no podría servir de base para agravar el título de imputación respecto del aquél que no hizo empleo del mismo. Ello por cuanto, en el caso examinado, lejos de estar frente a un porte de arma blanca que haya sido inadvertido para Barazarte Madera, este último, además de mantener, él mismo, un elemento de esas características, tenía cabal conocimiento respecto al porte que ostentaba Dudamel Dudamel de un objeto de esa naturaleza.

En efecto, ambos agentes, previamente confabulados para perpetrar un ilícito de los contornos de un robo con violencia, desplegaron su accionar sabiendo, recíprocamente, que el otro portaba un cuchillo, cuestión que se deduce del acometimiento conjunto que ellos desplegaron, en que uno y otro exhibieron a las víctimas tales armas. Por lo mismo, y según ya ha sido desarrollado en este acápite, formaba parte del plan delictivo común de los agentes y, por ende, no constituyó un exceso de dolo de parte Dudamel Dudamel, el efectivo uso del cuchillo que éste portaba y a través del cual hirió a David Fuenzalida Campos. Por tal razón, las lesiones sufridas por dicho agraviado, dada la consabida aptitud de los elementos cortopunzantes para afectar severamente la integridad corporal de las personas, resultan plenamente atribuibles a Barazarte Madera.

A mayor abundamiento, y clarificando este temática, se ha sostenido doctrinariamente que “ha de tenerse presente que para apreciar coautoría también en el exceso basta que los otros intervinientes obren a su respecto con dolo eventual”, agregándose, además, que dicho exceso no se configura, por ejemplo, “en el caso del robo con intimidación que acabó en robo con homicidio, si el tercer interviniente hubiese ignorado que los otros portaban armas capaces de causar la muerte, y hubiese confiado razonablemente que, en el peor de los casos, se servirían de su fuerza física para reducir una posible resistencia de la víctima” (Enrique Cury Urzúa, *Derecho Penal*, Parte General, 7ª ed., 2005, p. 611).

Para concluir, y siempre en lo tocante a la solicitud de recalificación planteada por la defensa, conviene señalar no modifica las conclusiones precedentemente consignadas la circunstancia de que el afectado Fuenzalida Campos, al advertir que Dudamel Dudamel se abalanzaba en su contra portando un arma blanca, haya intentado cruzar la calle, situación que lo habría alejado espacialmente de la acción que desplegaba Barazarte Madera respecto de Javiera Guzmán, aspecto que, en concepto de la defensa, impediría imputarle a este último, en razón de dicha distancia, las lesiones sufridas por el aludido ofendido. Lo anterior, puesto que lo relevante para estos efectos, según ha sido destacado anteriormente, está dado por los alcances y extensión del plan delictivo, el cual, en la especie, sí abarcaba el eventual uso de armas blancas por parte de cualquiera de los sujetos activos, lo que unido a la contribución funcional prestada por ambos impide calificar la intervención de Barazarte Madera a un título distinto al de coautor.

DUODÉCIMO: Rechazo de la agravante especial contemplada en el artículo 449 bis del Código Punitivo. Que en concepto de estos sentenciadores, corresponde desestimar la aplicación de circunstancia modificatoria de responsabilidad criminal prevista en la disposición previamente citada, la cual opera respecto de los delitos que allí se explicitan, entre ellos, en lo que aquí interesa, los robos en sus distintas modalidades, en el evento de que el imputado haya actuado formando parte de una agrupación u organización de dos o más personas destinada a cometer dichos hechos punibles, siempre que ésta o aquélla no constituyere una asociación ilícita.

De entrada, y habida consideración de la calificación jurídica atribuida al hecho N° 1, la misma resulta inaplicable a su respecto, de tal manera que sólo resta por examinar su procedencia en lo tocante al suceso N° 2, el cual únicamente concierne, en lo tocante al presente juicio, al acusado Barazarte Madera.

En este sentido, la agravante en cuestión, la cual vino a sustituir aquella que exasperaba la penalidad en caso de pluralidad de malhechores, anteriormente regulada en el derogado artículo 456 bis N° 3 del Código Penal, demanda la existencia de una agrupación u organización de dos o más personas destinada a cometer los hechos punibles que la propia normativa enumera. Como puede observarse, en buena medida, la misma encuentra correspondencia con la circunstancia normada en el artículo 19 letra a) de la Ley 20.000, consistente en haber formado parte el imputado de una agrupación o reunión de

delincuentes. Sobre al particular, autores como Héctor Hernández Basualto, a propósito de esta última, han sostenido que para su configuración resulta necesario una cierta organización y permanencia, esto es, y aunque en una menor entidad que la asociación ilícita, que la agrupación u organización esté destinada a la comisión de un número indeterminado de delitos. (“Algunos Aspectos de la Ley 20.000”, Informe en Derecho, noviembre 2007).

Incluso más, a juicio de estos magistrados las exigencias doctrinarias requeridas a propósito de la circunstancia contemplada en el artículo 19 letra a) de la Ley N° 20.000 se tornan aún más claras en el actual artículo 449 bis del Código Penal. En efecto, por un lado, esta última agravante no sólo demanda que el sujeto “forme parte” de la organización, sino que, adicionalmente, éste “actúe” en tal condición. Por otro lado, el último precepto requiere explícitamente, como destino de la agrupación u organización, la comisión de hechos punibles -los mencionados en el mismo precepto- en plural, exigencia tampoco se encuentra expresamente mencionada por el tenor literal de la circunstancia especial contemplada en la ley de drogas.

Despejado lo anterior, y en torno a la eventual concurrencia de la agravante analizada, estos jueces consideran que, con prescindencia de la eventual concurrencia de sus presupuestos normativos en el hecho N° 2 de la acusación, la imputación fiscal no entrega ninguna descripción fáctica relativa a la forma en que la misma se configuraría en la especie. Lo anterior, se juzga del todo relevante en el caso concreto, al constituir ésta una circunstancia concomitante al hecho punible, y cuya eventual concurrencia, por tal motivo, debe ser dilucidada conjuntamente con la decisión de condena. De este modo, afirmar su eventual configuración en tales condiciones, de acuerdo al criterio de la sala, importaría una transgresión al mandato de congruencia, contenido en el artículo 341 del Código Procesal Penal, cuyo fundamento no es otro que el debido resguardo al derecho a defensa, pues se aplicaría una agravante enlazada al delito de robo calificado sobre la base de hechos o circunstancias no descritos en el libelo acusatorio.

De otra parte, y sin perjuicio de todo lo anteriormente expresado, tampoco se aprecia, en el caso concreto, alguna circunstancia que exceda al mero reparto funcional que caracteriza a toda forma de coautoría, de tal manera que considerar dichos aportes como

fundantes de la agravante analizada conculcaría la prohibición de doble valoración, contemplada, a nivel legal, en el artículo 63 del Código Penal.

DÉCIMO TERCERO: Alegaciones relativas a circunstancias modificatorias de responsabilidad ajenas al hecho punible y demás factores relevantes para la determinación y ejecución de la pena. Que en la oportunidad prevista en el artículo 343 del Código Procesal Penal, los intervinientes efectuaron las siguientes alegaciones:

1.- Ministerio Público:

En primer término, en lo referente al delito de homicidio simple, el acusador peticionó la imposición, respecto de ambos encartados, de una pena de veinte años de presidio mayor en su grado máximo, lo cual fundó en la mayor extensión que, a su juicio, revestía el mal causado a consecuencia del ilícito, al haberse producido la muerte de una persona.

En segundo lugar, y en lo referente al robo calificado, atribuido únicamente a Barazarte Madera, solicitó la aplicación de igual sanción a la antes mencionada.

En tercer lugar, manifestó oposición a la pretensión de la defensa en orden a tener por configurada, en favor de ambos encausados, la atenuante de irreprochable conducta anterior. Lo anterior, puesto que, según explicó, si bien los respectivos extractos de filiación y antecedentes no registran anotaciones prontuariales pretéritas, no puede perderse de vista, según aseveró, que ambos se encuentran en una situación migratoria irregular, lo cual impide descartar, a su respecto, la existencia de condenas previas en su país de origen. Agregó que, a mayor abundamiento, el acusado González León, según da cuenta el informe policial N° 20230232951/01545/826, de 3 de mayo de 2023, de la Brigada de Homicidios Metropolitana, señala que de acuerdo a la información emanada a OCN Interpol Caracas, y una vez verificado el Sistema de Investigación e Información Policial (SIIPOL) éste mantiene un requerimiento por el delito de robo por grupo armado o disfrazado, de fecha 25 de enero de 2018.

2.- Defensa de ambos acusados:

Dicho interviniente solicitó, en primer término, la aplicación, en favor de sus representados, de la atenuante prevista en el artículo 11 N° 6 del Código Penal, puesto que conforme a sus respectivos extractos de filiación y antecedentes éstos no mantienen condenas pretéritas, no siendo obstáculo para ello, en su concepto, el requerimiento

asociado al acusado González León, pues el mismo no da cuenta que haya sido destruida la presunción de inocencia de la que goza en dicho proceso. Adicionó, que contrariamente a lo sostenido por la Fiscalía, un extracto de filiación y antecedentes resulta suficiente para el reconocimiento de dicha atenuante, dado el carácter objetivo de la misma, máxime si el órgano persecutor podría haber obtenido, en el marco de la cooperación internacional, información relativa a la eventual existencia de condenas previas respecto de los acusados.

En segundo lugar, y en cuanto a las penas que correspondía imponer a sus mandantes, señaló que procedía efectuarse un tratamiento diferenciado. En tal sentido, indicó, de una parte, que respecto del imputado González León debía aplicarse una sanción de diez años y un día de presidio mayor en su grado medio; de otra parte, y en lo atinente al encartado Barazarte Madera, era procedente, con arreglo a la regla de reiteración prevista en el artículo 351 inciso segundo del Código Procesal Penal, una pena única de quince años y un día de presidio mayor en su grado máximo. Subsidiariamente a esta última petición, abogó para que a dicho acusado se le impusiera, de conformidad con lo preceptuado en el artículo 74 del Código Penal, dos penas de diez años y un día de presidio mayor en su grado medio.

DÉCIMO CUARTO: En cuanto a la minorante de irreproachable conducta anterior. Que, respecto de la atenuante del artículo 11 N° 6 del Código Penal, pedida por la defensa, debe partirse de la premisa, y en primer término, que tanto las circunstancias minorantes, como las agravantes de responsabilidad penal, requieren prueba, o al menos sustentarse en antecedentes constatados durante el juicio, o bien, incorporados en la audiencia de determinación de pena. Por otro lado, y como segundo punto, jurisprudencialmente se ha entendido que esta atenuante implica un historial libre de condenas previas, razón por la cual el documento que tradicionalmente le ha servido de sustento es el extracto de filiación y antecedentes evacuado por el Servicio de Registro Civil e Identificación, siendo entonces idóneo para apoyar tal circunstancia. Es sobre la base de estas ideas que debe razonarse entonces acerca de la idoneidad de este documento para el caso que nos ocupa, esto es, tratándose de personas extranjeras que ingresaron al país de modo irregular y que se encontraban en esa misma condición al momento de ser detenidas. Precisamente, cuando una persona nace en nuestro país, su nacimiento queda registrado debidamente, extendiéndose el respectivo certificado, de modo que desde el

origen de una persona, el Estado sabe de su existencia, y, de esa forma, en la medida que esta persona vaya creciendo, irá adquiriendo derechos y deberes, en virtud de los cuales de una u otra manera irá dejando huellas que son perceptibles por el Estado, quedando, así, bajo el control y protección de éste. Lo mismo acontece con quienes que no habiendo nacido en el territorio nacional-chilenos y/o extranjeros- ingresan a él por los pasos fronterizos que corresponden, cumpliendo la normativa vigente y extendiendo la documentación respectiva, momento desde el cual empezarán a generar un historial en Chile, igualmente visible. En todos estos casos, un certificado de filiación y antecedentes tendrá el mérito de reflejar realmente un historial de vida. Sin embargo, no puede sostenerse lo mismo respecto de aquellas personas que ingresaron al país por pasos no habilitados, trasgrediendo la normativa nacional y por tanto no extendiendo la documentación que es requerida, lo que implicará que esa persona será invisible para el Estado, el que sólo sabrá de su existencia-en el caso que nos concierne-cuando cometa algún delito, creándose recién en ese momento un historial. Es así como entonces cabe preguntarse si este documento tiene la virtud de reflejar, como corresponde, la historia de una persona para considerarla exenta de reproches penales previos, en circunstancias que, en concreto, nada se sabe de ella y no recoge, en efecto, una historia que pueda ser valorada en su real dimensión. Ello provoca una evidente desigualdad entre quienes han cumplido la normativa con quienes no lo han hecho y han vivido al alero de la clandestinidad que supone ese incumplimiento, por cuanto se le dará el mismo valor a un extracto de filiación y antecedentes que recoge años-o al menos un tiempo pesquisable respecto de aquellos que ingresaron al país cumpliendo las leyes- de una conducta irreprochable versus uno que no tiene la misma virtud.

Lo anterior no se trata de presumir o suponer que entonces el extranjero irregular-como es el caso de ambos acusados-cuenta con antecedentes penales, sino que de concluir que el documento en el que pretende apoyarse la atenuante no es idóneo para justificar una pena menor que aquella que le correspondería en el evento de no tenerla. El sostener lo contrario, importa afirmar, en consecuencia, que al sistema penal le es indiferente quién ha vivido de acuerdo a las normas de nuestro país con quienes no, dándole el mismo tratamiento beneficioso a unos y otros, lo que deviene en injusto y en inequitativo. Incluso resulta inequitativo e injusto entre el extranjero que ingresó al amparo

de nuestra legislación con aquel que no, por cuanto aun cuando el primero pueda tener un tiempo de permanencia más reducido en el país que un nacional, igualmente en ese tiempo ha sido visible para el Estado y por ende reflejará un historial, el que se verá afectado en caso de ser condenado, cosa que no acontece con el segundo.

No se trata tampoco de criminalizar la migración en un contexto actual nacional e internacional en que el migrante se considera víctima de delitos que afectan la migración irregular, y respecto de los cuales se castigará a los autores, mas no al migrante, conforme es debido, sino que se trata de otra órbita dentro del sistema punitivo en que enfrentándose un extranjero irregular como autor de un ilícito y declarado culpable de éste, su situación procesal se evalúe en su mérito, como se haría con cualquier nacional y extranjero regular enfrentados a la misma situación jurídica.

En definitiva, y en base a todas las consideraciones previamente desarrolladas, los extractos de filiación y antecedentes incorporados respecto de los condenados González León y Barazarte, quienes ingresaron sin cumplir la normativa vigente nacional y se encontraban irregulares al momento de sus detenciones, no tiene la aptitud para sustentar la minorante del artículo 11 N° 6 del Código del ramo, por lo que se procederá a su rechazo. Cabe mencionar que lo aquí decidido no ha sido en razón de la información proporcionada por la Fiscalía respecto de González León, en cuanto a tener un requerimiento de su país de origen (Venezuela) por un delito de robo a mano armada o disfrazado de 18 de junio de 2018, por cuanto no consta que por aquella solicitud hubiere resultado condenado, por lo que del mismo modo como ocurriría en Chile, un documento de similares características no tendría la capacidad para ser considerado un antecedente penal previo que merme la atenuante. Es así como el rechazo de la aludida circunstancia modificatoria se basa en los razonamientos ya explicitados.

Por su parte, y a diferencia de lo sostenido por la defensa, no tiene vinculación alguna con las argumentaciones previamente vertidas, las razones por las cuales una persona migra, toda vez que no se están analizando ni son base de la discusión-las que en todo caso no se ventilaron respecto de estos sentenciados-por cuanto ello escapa y es ajeno al razonamiento en que se funda el rechazo de la mentada atenuante. No obstante, y recogiendo tales alegaciones enlazado con las reflexiones previas, conviene indicar que, de todos modos, de aceptar el argumento de la defensa, implicaría sostener que unas causas

para migrar son más válidas que otras, de modo que unas justifican ingresar al país sin cumplir con la normativa de tal manera que enfrentados luego a un proceso penal el certificado de filiación y antecedentes tenga la misma idoneidad que aquel extranjero que ingresó al amparo de nuestra legislación.

Finalmente, la presunción de inocencia que invoca la defensa no aplica del modo que ella pretende, por cuanto tal principio se alza como un pilar ante el juicio en que cualquier persona debe presumirse inocente, siendo la carga probatoria del ente persecutor para derribar la misma, mas no respecto de un historial en virtud del cual se pretende constituir una minorante, la que requiere fundarse en antecedentes concretos.

DÉCIMO QUINTO: Individualización de la pena. Que sobre el particular, se efectuará un examen separado respecto de cada uno de los encartados.

1.- Con relación al acusado González León:

Sobre la base de la penalidad en abstracto que prevé el artículo 391 N° 2 del Código Penal -de acuerdo a su texto vigente a la fecha del suceso N° 1-, la ausencia de circunstancias modificatorias de responsabilidad criminal, y lo dispuesto en los artículos 67 y 69 del citado texto legal, se impondrá a dicho imputado la sanción principal de catorce años de presidio mayor en su grado medio.

En este sentido, pudiendo el Tribunal recorrer el marco penal, consistente en presidio mayor en su grado medio, en toda su extensión, se impondrá la aludida sanción en los términos antes citados, por estimarse que existe, en el caso concreto, una mayor extensión del mal causado por el delito. Lo anterior, en atención a la antijuridicidad incrementada que representa el ataque de dos sujetos armados con cuchillos en contra de una víctima que, además de encontrarse desarmada, transitaba solitaria y en un horario en que, por tratarse de altas horas de la madrugada, circulan escasas personas, tal como se aprecia en los registros de videos analizados en este fallo. Ello, ciertamente, da cuenta de un contexto fáctico en que el ofendido se encontraba, objetivamente, en contraste con la situación de los encausados, en una manifiesta indefensión.

Con todo, se desestima la extensión de pena solicitada por el Ministerio Público, ascendente a veinte de años de presidio mayor en su grado máximo, puesto que la misma no se condice con el marco punitivo vigente a la fecha del ilícito.

2.- Con relación al acusado Barazarte Madera:

De entrada, corresponde desechar la alegación esgrimida por la defensa, en la audiencia prevista en el artículo 343 del Código Procesal Penal, dirigida a la imposición de una pena única respecto de dicho encausado -de quince años y un día de presidio mayor en su grado máximo-, en lo tocante a los dos ilícitos por los que fue condenado, solicitud que dicho interviniente letrado fundó en lo dispuesto en el artículo 351 inciso segundo del mismo cuerpo legal.

En efecto, el presupuesto común para la aplicación de ambos incisos del citado artículo 351, concerniente a supuestos de reiteración de crímenes o simples delitos, y tal como se titula el propio precepto, estriba en la comisión de dos o más ilícitos de la misma especie, sea que éstos constituyan o no infracciones que puedan ser consideradas como un mismo delito. Dicha nota común esencial, y que activa su procedencia, se encuentra legalmente definida en el inciso final de la referida disposición, al señalar que “[p]ara los efectos de este artículo, se considerará delitos de una misma especie aquellos que afectaren un mismo bien jurídico”.

Pues bien, estos jueces estiman que no resulta posible afirmar una identidad entre los objetos de protección que amparan las dos figuras delictivas cometidas por el aludido encausado. En este sentido, y más allá de la evidente relación existente entre la vida, como bien jurídico tutelado por las distintas formas de homicidio, y la integridad corporal, como objeto de protección que parcialmente integra el robo con violencia calificado concurrente en la especie, no puede perderse de vista, con relación a esta última figura pluriofensiva -y compleja-, que el núcleo de su antijuricidad reside, al igual que en las distintas modalidades de robo o hurto, en la afectación de la propiedad, aspecto que de suyo explica su propia denominación.

Así las cosas, al carecer de fundamento normativo la petición en orden a la aplicación del artículo 351 del Código Procesal Penal, la situación concursal del encartado en comento únicamente puede ser tratada con arreglo a la regla de acumulación material de penas, contemplada en el artículo 74 del Código Punitivo.

Despejado lo anterior, y en lo referente a la pena que se impondrá a Barazarte Madera por el delito de homicidio simple, la misma se impondrá en idéntica extensión a la que se aplicará en contra del acusado González León, y por idénticos basamentos, los cuales, para evitar reiteraciones innecesarias, se tienen por íntegramente reproducidos.

De otra parte, en lo referente al robo con violencia calificado, castigado, en la modalidad que aquí interesa, en el 433 N° 3 del Código Penal, atribuido únicamente al encartado Barazarte Madera, se impondrá la pena de doce años de presidio mayor en su grado medio. Sobre el particular, cabe tener presente que la pena en abstracto asignada por el legislador para el delito en comento es la de presidio mayor en su grado medio a máximo, debiendo aplicarse a su respecto, dada la ubicación sistemática de dicho ilícito, las reglas previstas en el artículo 449 del mismo cuerpo normativo. En este orden de ideas, y conforme a los parámetros que lista la regla 1ª de esta última disposición, el Tribunal tiene especialmente presente, de un lado, la ausencia de circunstancias modificatorias de responsabilidad criminal y, del otro, la mayor extensión del mal causado. Esto último en atención a que, de acuerdo al dictamen pericial forense, el afectado sufrió lesiones que, de no haber mediado los cuidados oportunos y eficaces, habrían desencadenado en su fallecimiento.

DÉCIMO SEXTO: Forma de cumplimiento de las penas y abonos. Que atendida la extensión total de las penas privativas de libertad que, en su caso, se impondrán a los acusados, las mismas deberán ser cumplidas de manera real y efectiva, no resultando procedente, en consecuencia, la aplicación de ninguna de las sanciones sustitutivas previstas en la Ley N° 18.216.

En lo concerniente a abonos, las penas principales se computarán, respectivamente, a contar del 22 de febrero de 2022, fecha a partir de la cual los encartados se encuentran sujetos a prisión preventiva con motivo de este proceso, tal como consta en el certificado emitido por la jefa de unidad de causas y sala de este Tribunal, de 9 de octubre de los corrientes. Con todo, cabe señalar que si bien ambos imputados fueron detenidos con fecha 21 de febrero de 2022, ello no es capaz de generar un día adicional de abono, toda vez que la aprehensión de éstos, según se señala en el mencionado certificado, fue practicada a las 19:37 horas y, por lo mismo, no alcanzó las doce horas de privación de libertad que exige el artículo 348 del Código Procesal Penal.

DÉCIMO SÉPTIMO: Costas. Que atento a lo prescrito en el artículo 600 del Código Orgánico de Tribunales, y por haber sido los acusados representados por la Defensoría Penal Pública, se eximirá a ambos del pago de las costas de la causa.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo dispuesto en los artículos 1°, 14 N° 1, 15 N° 1, 28, 50, 67, 69, 74, 391 N° 2, 432, 433 N° 3, 439 y 449 del Código Penal; artículos 1°, 295, 297, 298, 323, 329, 340, 341, 342 y 348 del Código Procesal Penal; artículo 17 de la Ley N° 19.970; artículo 17 de la Ley N° 18.556; y artículo del 600 del Código Orgánico de Tribunales, **SE DECLARA QUE:**

I.- SE CONDENA a ARMANDO JOSÉ GONZÁLEZ LEÓN y a RICKY ALFONSO BARAZARTE MADERA, ambos ya individualizados, a sufrir, cada uno, la pena de **catorce años de presidio mayor en su grado medio**, y la accesoria legal de inhabilitación absoluta perpetua para cargos y oficios públicos y derechos políticos y la de inhabilitación absoluta para profesiones titulares mientras dure la condena, todo ello por su responsabilidad en calidad de **coautores del delito consumado de homicidio simple**, previsto y sancionado en el artículo 391 N° 2 del Código Penal, cometido en la comuna de Santiago el día 15 de febrero de 2022.

II.- SE CONDENA a RICKY ALFONSO BARAZARTE MADERA, ya individualizado, a sufrir la pena de **doce años de presidio mayor en su grado medio**, y la accesoria legal de inhabilitación absoluta perpetua para cargos y oficios públicos y derechos políticos y la de inhabilitación absoluta para profesiones titulares mientras dure la condena, todo ello por su responsabilidad en calidad de **coautor del delito consumado de robo con violencia calificado**, previsto y sancionado en el artículo 433 N° 3, en relación con los artículos 397, 432 y 439, todos del Código Penal, cometido en la comuna de Santiago día 16 de febrero de 2022.

III.- Que la totalidad de las penas privativas de libertad impuestas, respectivamente, en los puntos precedentes, deberán ser cumplidas de manera efectiva, iniciándose su cómputo a partir del día 22 de febrero de 2022, conforme a lo razonado en el considerando décimo sexto.

IV.- Atendido lo dispuesto en el artículo 17 de la Ley N° 19.970, **se ordena**, previa toma de muestras biológicas si fuese necesario, **la determinación de la huella genética de ambos sentenciados** y su inclusión en el Registro de Condenados.

V- Se exime a los condenados del pago de las costas de la causa.

VI.- Comuníquese la presente sentencia, en su oportunidad, al Servicio Electoral, de conformidad con lo preceptuado en el artículo 17 de la Ley N° 18.556.

Una vez ejecutoriada, remítase copia autorizada de esta sentencia al Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, a fin de que proceda a dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 468 del Código Procesal Penal.

Regístrese y oportunamente archívese.

Se previene que el juez Cristian Fuentealba Zamora fue del parecer de estimar configurada, en favor de ambos acusados, la minorante de irreproachable conducta anterior y, sobre la base de su concurrencia y las argumentaciones que a continuación se expondrán, imponer a ambos la pena de diez años y un día de presidio mayor en su grado medio por el delito de homicidio simple, y una sanción principal, en idéntica extensión, al encartado Barazarte Madera, por el ilícito de robo calificado previsto en el artículo 433 N° 3 del Código Penal, todo ello sobre la base de las siguientes consideraciones:

1° Que habida cuenta de que los extractos de filiación y antecedentes de los encartados se encuentran libres de toda anotación pretérita, tanto en el registro de condenados, como en el registro especial de condenas por actos de violencia Intrafamiliar, correspondía reconocer, en favor de éstos, la atenuante de irreproachable conducta anterior, contemplada en el artículo 11 N° 6 del Código Penal.

2° Que en este orden de ideas debía desecharse la alegación del Ministerio Público, en orden a que la referida minorante no se configuraría en la especie en razón de que tales extractos únicamente dan cuenta de la ausencia de condenas previas de los encartados en el territorio nacional, mas no así a la inexistencia de las mismas en su país de origen.

3° Que de entrada, este magistrado estima necesario relevar que la interpretación de la atenuante debe encontrarse desprovista de todo tipo de consideraciones de orden moral o ético, pues ello no se condice con el ámbito normativo sobre el que recae el presente juzgamiento, esto es, el Derecho Penal. Ello por cuanto, como es sabido, tal rama del ordenamiento jurídico dispone de los medios de reacción más enérgicos que, en el marco de un Estado Democrático de Derecho, pueden imponerse en contra de un ciudadano. Lo anterior, por cierto, demanda que sus diversos institutos, entre ellos, las circunstancias capaces de morigerar la responsabilidad del infractor, sean interpretadas de un modo tal que, en la práctica, su aplicación no se vea restringida a sujetos virtuosos o que lleven determinados modos de vida.

Por tal razón, una inteligencia de la atenuante que sea condigna con los anteriores postulados exige, para descartar su procedencia, que el reproche pretérito que pese sobre el imputado necesariamente revista relevancia jurídico-penal; más específicamente, que tal reproche encuentre fundamento en una condena anterior a los hechos materia de enjuiciamiento y contenida en una sentencia firme y ejecutoriada. Por el contrario, cualquier otra clase de reproche no puede reputarse legítimo para estos efectos, pues, como es sabido, previo a la dictación de una condena firme los ciudadanos están amparados por la presunción de inocencia, consagrada tanto a nivel constitucional (artículo 5° de la carta fundamental, en relación con el artículo 8.2 de la Convención Americana de Derechos Humanos), como legal (artículo 4° del Código Procesal Penal).

Confirma lo anterior, el hecho de que en aquellos casos en que el legislador ha querido dotar de eficacia, para efectos de desvirtuar la minorante aquí examinada, a situaciones jurídicas diversas a una condena penal pretérita firme, así lo ha señalado expresamente. Ejemplo de ello está dado por el artículo 14 ter de la Ley N° 20.066, al prescribir que, tratándose de los delitos constitutivos de violencia intrafamiliar, el juez, para efectos de evaluar la irreprochable conducta anterior del imputado, deberá considerar las anotaciones que consten en el registro especial que contempla dicho cuerpo legal. Tal razón sistemática permite concluir, de manera aún más prístina que, fuera de los supuestos excepcionales que la ley describe, sólo una condena penal pretérita, impuesta por una sentencia definitiva firme, habilita a descartar la atenuante prevista en el artículo 11 N° 6 del Código Punitivo.

4° Que bajo este entendimiento de la atenuante en cuestión, cabe concluir que pesa sobre la parte acusadora la carga de desvirtuar su concurrencia en el caso concreto, para lo cual deberá proporcionar al órgano jurisdiccional todos los antecedentes que permitan afirmar, de manera fehaciente, la existencia de reproches penales pretéritos en contra del acusado.

Un parecer diverso conlleva a sostener que el estado normal de cosas descansa en que los acusados mantienen condenas previas y, por lo mismo, que su ausencia es lo que debe ser demostrado en el proceso criminal, so pena de no poder ser acreedor de la mencionada minorante. Tal concepción, en consonancia con la presunción de inocencia de que goza todo imputado, pasa por alto el hecho de que la destrucción legítima de dicha

garantía únicamente resulta posible sobre la base de una sentencia definitiva firme, dictada en un proceso penal, y que establezca fehacientemente su responsabilidad en un delito.

Por tal razón, no resulta procedente, en opinión de este juez, para la configuración de la atenuante analizada, exigir la incorporación de antecedentes que den cuenta fehaciente de la ausencia de reproche penal pretérito del imputado durante todo el ciclo vital en que se puede atribuírsele dicha clase de responsabilidad, ni menos aún, hacer recaer en su defensa la carga de acreditar tal ausencia, puesto que, conforme fuera apuntado precedentemente, ello implicaría invertir el estado normal de cosas, al suponer, salvo prueba en contrario, que éste sí ha sido condenado de manera pretérita.

5° Que la situación migratoria irregular que, en el caso concreto, pesa sobre ambos acusados no puede erigirse como fundamento para imponerles mayores gravámenes de cara a la aplicación de la atenuante examinada. Ello, por cierto, importaría una afectación de la garantía de igualdad ante la ley, al otorgarse un trato diferenciado, carente de justificación normativa, y basado en tal situación migratoria, en comparación con la que tendría no sólo un ciudadano nacional, sino que también un extranjero que no esté en tal condición de informalidad.

6° Que en tal sentido, el Ministerio Público, como representante del Estado en la persecución penal pública, cuenta con todos los medios para recabar, en el marco de la cooperación internacional, la información relativa a la situación prontuarial precedente de cualquier persona que enfrente un proceso penal. En este orden de ideas, el hecho de que respecto de determinados Estados extranjeros pueda existir algún tipo de imposibilidad o dificultad en la obtención de tal clase de información, ello en caso alguno puede esgrimirse como fundamento para perjudicar la situación de un acusado que se encuentre en condición de migrante irregular.

Por lo demás, cabe destacarse que, en el caso concreto, el órgano persecutor únicamente incorporó el informe policial N° 20230232951/01545/826, de 3 de mayo de 2023, de la Brigada de Homicidios Metropolitana, el cual señala que de acuerdo a la información emanada a OCN Interpol Caracas, y una vez verificado el Sistema de Investigación e Información Policial (SIIPOL), el imputado Armando González León mantiene un requerimiento por el delito de robo por grupo armado o disfrazado, de fecha 25 de enero de 2018, antecedente que, como resulta fácil advertir, no da cuenta de condena

pretérita alguna. Tal informe, por lo demás, indica explícitamente que el encartado Ricky Barazarte Madera no presenta, a la fecha de su emisión, registro policial alguno.

7° Que en este orden de ideas correspondía imponer a los acusados, respectivamente, las penas más arriba indicadas. Ello por cuanto, de una parte, y en lo atinente al delito de homicidio simple, dicha extensión se estima coherente con lo dispuesto en los artículos 67 y 69 del Código Punitivo, máxime si el resultado mortal, constituye, precisamente el mal inherente a su realización. De otra parte, y en lo referente al robo calificado, si bien este juez comparte los argumentos esgrimidos en la sentencia, en cuanto a la verificación de una mayor magnitud del mal causado por dicho ilícito, tal antijuridicidad incrementada se ve contrapesada por la concurrencia de la minorante en comento, y a la ausencia de toda agravante, de modo que, en consonancia con lo preceptuado en el artículo 449 del mencionado texto legal, cabía aplicar la pena en el límite inferior del marco punitivo.

Redactó la sentencia, y su prevención, el juez Cristian Fuentealba Zamora.

RUC N° 2200154691-4

RIT N° 301-2023

Dictada por el Cuarto Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago, cuya sala estuvo conformada por los jueces titulares Cristina Cabello Muñoz, Claudia Morgado Moscoso y Cristian Fuentealba Zamora. No firma la segunda de las nombradas, por estar haciendo uso de permiso